

La Neurosis o Las Barricadas Ed.

LA POLICÍA

UN ANÁLISIS CRÍTICO

Colectivo La Plebe



Colectivo La Plebe

La policía

Un análisis crítico

La Neurosis o Las Barricadas Ed.



*La policía.
Un análisis crítico
Colectivo La Plebe
La Neurosis o Las Barricadas Ed.
Madrid
2.^a edición
2022*

Se recomienda encarecidamente la reproducción o copia de cualquier parte o la totalidad de este libro que tienes entre tus manos, siempre que, por supuesto, no implique su venta o derive en alguna otra forma de beneficio comercial.

ÍNDICE

Introducción	7
Capítulo 1. La peor de las pesadillas	15
Capítulo 2. Lavar la imagen	25
Capítulo 3. La invasión social	39
Capítulo 4. Justicia policial	59
Capítulo 5. El brazo armado de la ley	73
Capítulo 6. Fabricar al enemigo	95
Capítulo 7. Aparentar y ser	109
Capítulo 8. «Trabajo» policial	121
Capítulo 9. La mentalidad policial	139
Capítulo 10. Un mundo sin policía	153

INTRODUCCIÓN

Al policía lector.

Señor o señora policía: lamento que le haya tocado la ingrata tarea de leer este libro. Podría usted estar vigilando delitos, protegiendo al mundo o analizando minuciosamente expedientes, tareas mucho más relacionadas con lo que tenía en mente cuando decidió convertirse en miembro de las fuerzas de seguridad.

Voy a intentar ahorrarle tiempo, por si todavía puede acabar el día atendiendo a esas labores.

Le antípico que en este texto no va a encontrar usted insultos a los policías. No es nuestro estilo ni nuestra intención meternos personalmente con el agente Fulanito o Menganito, así que quédese tranquilo. Nada de gruesas palabras.

Tampoco va a encontrar el deseo de que ustedes sufran terribles males, enfermedades graves o accidentes fatales. Si hablamos de la desaparición de la policía, lo hacemos refiriéndonos a la estructura policial, a la institución. Tampoco le vamos a engañar: en nuestros sueños hay un mundo regido por la libertad y la igualdad en el que

no tiene lugar una fuerza armada para vigilarlo. Tampoco lo tiene la patronal o, por poner otro caso, la Iglesia. No somos demasiado originales, puesto que hay una abundante literatura utópica y socialista que coincide con estos planteamientos. Nuestra intención sería que ustedes, como cuerpo, no fueran necesarios, que se disolvieran. Y eso solo es posible con un cambio de sistema, que probablemente usted juzgará como imposible, «locura de unos pocos», que diría San Agustín. Mientras ese cambio llega, nos gustaría que ustedes ocupasen un papel residual, a la manera de otras instituciones que antaño fueron relevantes y hoy tienen escaso predicamento, como los sacerdos o los aguadores.

Hemos tratado de hacer un libro que conjugue las prescripciones clásicas de *enseñar deleitando*. Exponemos un conjunto de análisis sobre la policía que no coincidirá con sus apreciaciones, claro. Lo vamos a hacer de manera sencilla y, a veces, irónica. Ya sabemos que vivimos tiempos en los que el humor tiene sus riesgos, pero seguro que alguno de sus compañeros le ha dicho, protestando, que «ya no se puede hacer chistes sobre nada». Aplique ese principio y deje correr su disgusto.

Vamos a usar referencias a otros autores, a periódicos, testimonios, datos e informaciones que pueden encontrarse fácilmente. No desvelamos ningún secreto estatal, de los muchos que suponemos que hay. No hemos puesto referencia a las fuentes por decisión consciente, y sería un verdadero tostón tener que hacerlo delante de un juez. Imagine qué trabajo le daría recopilar todas las fuentes que hemos usado para acabar descubriendo que, si las conclusiones son más o menos nuestras, los datos provienen de tanta gente que sería arduo denunciar a todos.

Le adelanto las tesis del libro, para que pueda darse cuenta de nuestras buenas intenciones: la institución policial ha ido creciendo mucho, en número e influencia, así como en tareas. Como es ya un tópico, hay cierta diferencia entre la imagen que ustedes transmiten y lo que realmente hacen. No se preocupe, esto pasa con cualquier empresa o institución. Pero nuestra tarea es justa esa, la de tratar de analizar la realidad. Cosas de radicales, ya sabe.

Consideramos que la policía es una fuerza armada al servicio del sistema político y económico. No me dirá usted que no es una definición acertada. *Fuerzas del orden*, las llaman. Claro que, si alguien no está de acuerdo con ese sistema político y económico, considerará que la labor de la policía tiene su peligro. Ya sabemos que ustedes se adaptan muy bien a cualquier otro sistema de los habidos durante los últimos 200 años. Defendieron el absolutismo de Fernando VII, el moderado liberalismo de Isabel II, la dictadura de Primo de Rivera, el sistema de la Restauración, incluso la II República (al menos, una parte de ustedes y durante un tiempo). Por supuesto, defendieron el orden durante el largo franquismo y ahora lo hacen en la democracia liberal. La cosa es que nosotros, como anarquistas, proponemos un sistema de relaciones en que la policía no sea útil ni éticamente correcta. Sí, ustedes se quedarían sin trabajo. Pero tranquilo, que para llegar al comunismo libertario falta algún tiempo e igual le pilla jubilado.

Que estas ideas le parezcan incorrectas, perversas o demoníacas, que le ofendan o que le muevan al desprecio es natural. Que usted tenga la posibilidad de denunciar el libro como un atentado a su dignidad, es uno de los motivos por los que escribimos este texto. Tenga en cuenta que no todo el mundo puede o quiere hacer eso.

Mire si no a los pobres habitantes de Lepe, que llevan años aguantando menoscabo sobre sus capacidades y nada, ni una denuncia.

En este libro no hay más delito que el de opinar y analizar. Si eso constituye algo punible, es que su orden y su democracia flaquean. Más allá de la indeseable propaganda que haría usted denunciando esta modesta publicación.

Por último, los autores del libro, que no son tan valientes como ustedes, que se lanzan a las calles en persecución del mal, no han dado sus nombres. Sabemos que su sagacidad es notable, pero tengan cuidado, no vayan a pagar justos por pecadores. De momento, se señalan como un colectivo cuyo interés es que el mundo piense un poco. Si esto le parece mal, nos dará la razón. Y seguro que eso no lo quiere.

Le recomendamos que deje este libro a un lado, siga con lo que quiera que ocupe su tiempo durante la jornada y se vaya a casa solo con la espinita clavada de que ahí fuera hay personas que no alaban su organización, cosa que, suponemos, ya intuía.

Al resto de lectores.

Este libro es fruto de recopilar información y de pensar en grupo sobre el mundo policial durante varios años. Viene a cubrir un aspecto curioso: la falta de monografías sobre las fuerzas del orden que, aunque tímidamente se ha atenuado en los últimos dos años, es manifiestamente destacable.

No se sabe si por miedo a la censura y denuncia, por falta de interés o por falta de potenciales lectores, poco se ha escrito sobre esto. Mucho menos de manera global, no sobre algún policía especialmente destacado, sobre algún aspecto histórico o sobre algún otro de carácter parcial.

Por eso, este libro solo es la puerta de entrada a la reflexión. Cada uno de los capítulos podría dar para otro libro. Quien desee recoger el testigo, adelante.

De lo escrito sobre la policía, destaca que buena parte sea de autores que antes han formado parte de diferentes cuerpos de seguridad. Lógicamente, su visión es, digamos, un tanto sesgada.

Sin embargo, la policía sigue siendo una organización celosa de su intimidad. Incluso las cifras de policías son dudosas. Qué decir sobre la composición sociológica de sus miembros, sobre sus prácticas cotidianas, sobre los delitos cometidos por sus miembros o sobre el funcionamiento de sus tácticas más visibles. No solo se oculta aquello que pudiera impedir su labor sino el máximo de información referente a ellos.

Por eso, este trabajo es el resultado de la información disponible, de la buscada por diferentes vías y de la reflexión en común. No es tanto un manual sobre cómo funciona la policía como un texto sobre por qué funciona de determinada manera y para qué.

Quien desee encontrar descripciones minuciosas de tácticas policiales o métodos para escapar a su control, no va a salir satisfecho. Quien busque repensar algo que parece asumido por buena parte de la sociedad, creemos que sí lo hará. En caso contrario, adelante, seguid buscando, o cread vuestras propias herramientas de reflexión.

Capítulo 1
LA PEOR DE LAS PESADILLAS

Quizá las cuatro novelas distópicas que más eco hayan tenido sean *1984* y *Rebelión en la granja*, de George Orwell, *Un mundo feliz*, de Aldous Huxley y *Fahrenheit 451*, de Ray Bradbury. Todas ellas comparten una serie de rasgos, entre los cuales tiene mucha importancia el sentimiento de control en oposición al deseo de libertad. Cuando se reflexiona sobre un mundo injusto, es un lugar común exponer que si la libertad no tiene espacio de desarrollo se pierde una característica humana fundamental. La necesidad de vivir con el menor número de obstáculos posible, junto con la posibilidad de crear un proyecto de vida personal y colectivo, es decir, la clásica distinción entre libertad negativa y positiva, es la base para pensar que, cuanto mayor sea la privación, peor es la vida humana y, en caso de privación absoluta, el mundo se parece claramente a una pesadilla.

Así, en *1984* podemos leer un mundo dominado por el control opresivo por medio de rituales, pantallas que vigilan y relectura del pasado. El terror cotidiano a desviarse de la norma es mayor cuanto

más extensiva es esa norma, cuanto más espacio ocupa. El control no domina solamente los cuerpos, los movimientos de la gente o sus acciones, sino el propio pensamiento, las intenciones. Es por eso que la fuerza de 1984 no reside tanto en describir un mundo dictatorial, sino en adentrarse en un fenómeno totalitario que tiene como objetivo la autoridad absoluta sobre las personas y la sociedad.

Un fenómeno similar se refleja en *Un mundo feliz*, en el que el control se ejerce de manera más científica y sutil. La propaganda en torno a una sociedad perfecta que convierte los deseos humanos en un mecanismo de integración en el sistema es menos *grosera* que la presencia permanente de un amenazador conjunto de instituciones. La novela de Huxley plantea cómo el sexo desinhibido y el uso lúdico de las drogas pueden ser factores alienantes que, junto a la manipulación genética y el uso de técnicas psicológicas de moldeamiento (que fácilmente pueden parecernos ahora un poco ingenuas), logren esa ausencia de libertad que señalábamos como característica común a las distopías.

También *Rebelión en la granja* habla de un mundo en que se ha eliminado la libertad, a partir precisamente de un discurso presumamente liberador. Los animales de la granja, para liberarse de sus amos humanos opresores, toman el control, pero poco a poco una parte de ellos se pone a trabajar para anular la disidencia, la lectura alternativa de los hechos, el debate. La libertad, como valor, no resulta práctica para la revolución.

Por supuesto, en *Fahrenheit 451*, el control mental se lleva a cabo por la propaganda y por el cierre de toda fisura en el discurso oficial. Con cierta ingenuidad, Bradbury centra la posibilidad de disidencia en la literatura, de manera que quienes controlan el apa-

rato estatal hacen un esfuerzo diario para evitar que los libros caigan en manos de la población, algo que les abriría los ojos, quizás no a unas prácticas políticas de resistencia, pero sí, al menos, al hecho artístico como refugio de la libertad.

La segunda característica que tienen en común las distopías suele ser la enorme desigualdad. Los mundos concebidos como delirio social son tremadamente desiguales en cuanto al acceso a los recursos, la toma de decisiones y las posibilidades de disfrutar de la vida. En general, hay una cúpula, más o menos visible, que dirige la vida de los demás de forma más o menos sutil. La aclamación constante al Gran Hermano, la adhesión ferviente de los ciudadanos a un modelo de distribución injusto, no oculta que esa desigualdad es la base del sistema, lo mismo que ocurre con la división en castas alfa o beta en *Un mundo feliz* o entre los bomberos y el resto de mundo en el libro de Bradbury, así como entre los cerdos y el resto de animales en *Rebelión en la granja*.

La capacidad de pervivencia de estos textos distópicos reside precisamente en que, al margen de las características de su época, que recogen de forma más o menos metafórica, entroncan con una serie de valores que para el ser humano podrían ser importantes. Hay distopías tecnológicas que señalan los peligros de las máquinas; las hay que hablan de la destrucción de la naturaleza; hay distopías reproductivas con control sobre los nacimientos; las hay que hablan sobre la lucha por recursos naturales... Cada una señala las preocupaciones de quien las crea, pero en el fondo, todo se reduce a la pregunta de si estamos creando un mundo en el que unos pocos ostentan el poder absoluto sobre muchos, pudiendo ejercer ese poder de manera irrefrenable.

Lo extraño de las distopías es la dificultad enorme que muestran sus protagonistas de resistir de manera colectiva. Los autores de distopías, con mucha frecuencia, plantean mundos cerrados en los que las posibilidades de actuar políticamente están circunscritas al ámbito individual o, en el mejor de los casos, al privado. En raras ocasiones se observa crecer un fenómeno político entendido como encuentro popular que cuestione el orden social. Fundamentalmente, porque quien se señala como disidente tiene enormes probabilidades de ser sometido a la violencia y, en último extremo, a la muerte.

Esto significa que, a pesar de que las distopías traten de presentar mundos donde la población defiende, incluso con entusiasmo, la opresión, es en última instancia la violencia la que frena el cambio. No una violencia simbólica, no un discurso amenazador solamente, sino la violencia física ejercida contra las personas: la detención, la tortura, el encierro, las heridas, la muerte. Cuando la resistencia trata de mostrarse, cuando el discurso del poder se agota y no vence las barreras mentales, entran en escena las pistolas, las porras, las esposas, las rejas. Entra en escena la policía.

No hay distopía sin un cuerpo policial eficaz que ejerce el control de la información y que no duda en practicar la coacción física (incluso lo celebra) contra quienes traten de romper el orden. La policía del pensamiento orwelliana o sus perros de la granja; los bomberos de Bradbury o la policía de *Un mundo feliz* parecen el último recurso, pero mantienen la amenaza constante de lo que puede pasarle a un rebelde. Redes oscuras o visibles de funcionarios armados cuidan de que el mundo no cambie. Grupos que disponen de armamento y que reciben órdenes sin rechistar, cuando no con la alegría de defender el mundo tal y como es.

Podría pensarse que los fenómenos literarios son creaciones individuales, fruto del genio más o menos lúcido de quienes las plasman. Sin embargo, si analizamos un poco el fenómeno artístico (como el científico o cualquiera que se vanaglorie de ser *creador*) encontramos, siguiendo las tradicionales tesis socialistas, que la creación es un proceso poco menos que imposible. Todo surge de algo anterior. Si la sensibilidad de una autora o autor puede poner hermosas palabras a la descripción de un mundo espantoso, no es menos cierto que los miembros para la construcción de ese mundo ya están en el aire, en el ambiente. Las preocupaciones por la falta de libertad e igualdad, así como por la imposibilidad de rebelarse sin toparse con la violencia estatal no las inventan quienes deciden escribir novelas. Si acaso les dan forma, intuyendo líneas maestras que están presentes, aunque sea de manera más o menos camuflada. En definitiva, cuando Orwell, Bradbury o Huxley ponen como tope final ante la rebelión el hecho policial, simplemente están aplicando la lógica del sistema tal y como lo conocemos. Están usando la imagen de la policía para integrarla, con absoluta coherencia, en la imagen de una sociedad opresora en grado máximo. Y, por supuesto, las dos imágenes casan a la perfección. Extraño sería que en todas las distopías se encontraran como elementos comunes otros quehaceres. Sería singular que en este tipo de textos ocuparan un lugar central los fontaneros, los panaderos, las maestras o las jugadoras de bádminton. Algo tiene que haber en la institución policial para que pueda acompañar al Estado y a la clase que acumula la riqueza en ese triángulo de opresión que habitualmente ha concebido el ser humano como el peor de los mundos.

La inmoralidad policial, las actuaciones sin fundamento ético, incluso inhumanas, no se circunscriben a relatos de mediados del siglo pasado. Es posible que una de las narraciones cinematográficas distópicas que mayor trascendencia haya tenido haya sido *Matrix*. En esta película, los seres humanos han perdido su libertad para convertirse en meras baterías con las que suministrar energía a las máquinas. A cambio, creen vivir en un mundo muy similar al del capitalismo actual, solo que, en realidad, se trata de un programa informático. Dado que el espacio conceptual de la narración podía convertir la peli en un ejercicio meramente estético e incomprendible, el guion decide incorporar elementos que todo el mundo reconozca. Y ahí entran en juego el agente Smith y sus clones, policías, reconocibles como tales, que ejercen la violencia (todo lo irreal que se quiera según los presupuestos de la historia, pero violencia clara) para defender el orden.

La intuición de quienes consiguen llevar al papel o a las pantallas los avisos de que algo va mal pone de manifiesto una alarma sobre el hecho policial: la peligrosidad de un cuerpo armado cuya labor fundamental consiste en defender el orden existente. Ese orden puede ser más o menos justo o absolutamente despiadado, pero siempre contará con un grupo de individuos que, usando la violencia, lo defenderá. Los autores señalan, pues, la inmoralidad de una ocupación que no está destinada a garantizar la justicia, sino el orden, la estabilidad, aunque esta estabilidad sea el origen de la opresión más descarnada. Las agudas mentes de escritores y guionistas perciben el fenómeno policial como un instrumento potencialmente peligroso que, en las manos adecuadas, puede transformarse en algo inhumano y brutal.

¿Qué lleva a estos artistas a estirar el concepto policial para adecuarlo al espacio distópico? ¿Qué diferencia, como decíamos, el mundo de la policía de los mundos laborales? ¿Por qué la policía da tanto juego en los universos distópicos y no lo dan las cantantes de zarzuela, por ejemplo, o los cocineros deconstructores?

Una de las respuestas más obvias podría encontrarse en forma de lista de siglas y nombres aterradores: DINA, Stasi, Gestapo, OVRA, Securitate, Ojrana, NKVD, KGB, Brigada Político Social, Mosad, SIDE, Guardia Civil... Allí donde ha habido un sistema político que ha pretendido el control de la población, la merma de la libertad y la defensa de la desigualdad, siempre se ha apoyado en un cuerpo organizado de búsqueda de información, control del orden en la calle, detención, tortura, encierro, represión callejera e incluso asesinato selectivo o masivo. Un cuerpo policial.

No es posible concebir la Alemania de Hitler sin la presencia constante de elementos policiales, incluso sin un fenómeno que, además de la militarización, corrió paralelo y que podría denominarse *policialización* de la sociedad: convertir a todo el vecindario en una red de chivatos, delatores, colaboradores en la tortura y asesinato de miles de personas. El paraíso de la concepción social de la policía y su idea de colaboración ciudadana.

Es imposible comprender cómo un dictador tan ramplón como Franco pudo morir en su cama tan tranquilo si no se echa mano de la constitución de una red policial tan numerosa que era inevitable su eficacia en la persecución de la disidencia.

La Operación Cóndor, de escala continental y cuyo objetivo era eliminar cualquier movimiento de protesta frente a los planes neoliberales y dictatoriales en América, no hubiera sido posible sin

la colaboración activa de sus diferentes policías. Policías encargados de infiltrarse, de detener, de torturar, de asesinar.

En definitiva: es inconcebible, al menos hasta ahora, un mundo cruel sin la ayuda de una policía que lo sostenga. Quienes forman parte de los cuerpos policiales de las diferentes distopías abarcan un abanico amplio respecto al mal que producen sus sistemas: desde los que miran con indiferencia el sufrimiento, pensando más en su propia supervivencia que en cuestiones éticas, hasta quienes abrazan de manera entusiasta la idea de Estado como garante de la justicia frente al posible caos e, incluso, quienes adoptan posiciones de fanatismo cruel. Por lo que se sabe de las policías de los sistemas más opresores, ese arco es el mismo: desde torturadores fríos y sistemáticos, hasta verdaderos obsesos que disfrutan eliminando, ya no la disidencia, sino los restos de dignidad de las personas que caen en sus manos.

Las mentes de quienes se dedican al arte han percibido esta potencia y la han descrito en términos que, a menudo, no han logrado superar los de la realidad. Sin embargo, han destilado el fenómeno policial hasta discernir que su misión es la obediencia y el mantenimiento del orden social, sea este el que sea.

Capítulo 2

LAVAR LA IMAGEN

Yo también digo que quien dice corchetes, no hay vicio, bellaquería ni maldad que no diga. No tienen alma, son retratos de los mismos ministros del infierno. Así te llevan asido, cuando no sea por los cabezones y te hicieron esta cortesía, será por lo menos de manera que con mayor clemencia lleva el águila en sus uñas la temerosa liebre, que tú irás en las dellos. Daránte codazos y rempujones, diránte desvergüenzas, cual si tú fueras ellos, y no más de porque con aquello dan gusto a su amo y es costumbre suya, sin considerar que ni él ni ellos tienen más poder que para llevarte a buen cobro preso, sin hacerte injuria. Desta manera te harán ir a el retro vade, a la cárcel.

Mateo Alemán, *Guzmán de Alfarache*, 1599.

MAX: He sido detenido por la arbitrariedad de un legionario, a quien pregunté, ingenuo, si sabía los cuatro dialectos griegos.

EL MINISTRO: Real y verdaderamente la pregunta es arbitraría. ¡Suponerle a un guardia tan altas Humanidades!

MAX: Era un teniente.

EL MINISTRO: Como si fuese un capitán general.

Ramón María del Valle Inclán, *Luces de bohemia*, 1920.

Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.

Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.

Federico García Lorca, *Romance de la Guardia Civil*, 1928.

4 polis de aspecto impecable
están sentados a una mesa
mirándome,
supongo que yo
no tengo tan buena pinta
a sus ojos,
¿por qué no
enviamos a esos muchachos a morir
en alguna guerra?
Sus madres no habrían
llorado más
de diez minutos.

Charles Bukowski, *4 polis*, 1980.

Crueles, ignorantes, temibles y despreciables. Cuatro ejemplos de cómo la visión de las fuerzas de seguridad que la gente ha tenido durante mucho tiempo llegó también a la literatura. Podríamos apuntar decenas de ejemplos, pero baste con estos para hacernos una idea de que la glorificación permanente de la policía que vivimos ahora (más en las sociedades occidentales que en otras latitudes, todo sea dicho) es un fenómeno más bien reciente. La aparición en la literatura de la figura policial ha estado, hasta hace bien poco, unida a los adjetivos que encabezan este párrafo: los personajes que la representan maltratan a los prisioneros o a la gente; a duras penas son capaces de comprender algo complejo; son figuras siniestras y, en todo caso, su labor es tan repugnante como la del verdugo (que incluso debía taparse la cara para no ser reconocido, por pura impopularidad de su tarea). Entre la burla y la denuncia, la literatura daba cuenta de la percepción social del fenómeno, al menos de la percepción de buena parte de las capas populares.

El mundo de la policía ni siquiera ocupa un gran interés artístico durante mucho tiempo. El soldado se ha rodeado tradicionalmente

de un halo aventurero, de un interés que proviene desde las novelas de caballerías, de una épica viril y patriotera que sí ha dado notables resultados artísticos, pero no hay personajes policiales heroicos, ni novelas centradas en su labor hasta la aparición de la novela policiaca, hoy denominada novela negra. Antes de eso, las figuras de uniforme son escasas y representadas siguiendo los patrones citados. E incluso en este género, vinculado a la idea de que los crímenes se pueden resolver mediante procedimientos más o menos científicos (que abarcan desde la recogida de pruebas a la pura y dura deducción intelectual), la figura del guardia es ridiculizada durante mucho tiempo, ahondando en el estereotipo de ignorancia y, con las obras de los maestros del género como Chandler o Dashiell Hammett, de corrupción.

Con el cine llega el gran divulgador de los iconos populares. Cada película representa el intento de ampliar la anécdota a arquetipo, abriendo la posibilidad a un uso propagandístico (consciente o inconsciente) o de reflejo social, que llegará con el tiempo a un número de personas inimaginable para los productos de imprenta.

Curiosamente, las primeras películas de consumo masivo, sin sonido aún, continúan la tradición literaria respecto a lo que la figura policial se refiere: los grandes del cine mudo, Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd, nunca representaron el papel de guardianes del orden. Hicieron burla sistemática de ellos, haciéndolos aparecer como unos brutos con escasa capacidad de reflexión y con una psicomotricidad bastante mejorable.

Cuando se analizan representaciones sociales en el arte surge siempre la misma duda: ¿representan una concepción previa o tratan de configurar modelos novedosos? ¿El arte refleja o adoctrina?

¿Quién influye a quién? No es fácil determinar esta cuestión. Se podría caer en teorías de la conspiración (y, por tanto, difícilmente demostrables) imaginando un comité de señores sentado alrededor de una mesa diseñando productos culturales para inducir a las masas y diciéndole a los estudios cinematográficos o a las cadenas de televisión lo que toca programar con el objetivo de producir opinión.

¿Tiene sentido esta hipótesis? Así contada, desde luego que no. A pesar de ello, en momentos concretos se puede demostrar la existencia de presiones para que esto ocurra. El caso de determinadas empresas (de tabaco o de bebidas, por ejemplo), que han pagado para que se incluyeran sus productos en la gran pantalla, siempre rodeados de un halo de valores positivos, es de sobra conocido. También son muy evidentes los momentos en los que diferentes países han usado la ficción para potenciar la imagen de perversidad del enemigo. Sería el caso de la figura de Edward Bernays, propagandista al servicio de EE.UU. y considerado uno de los iniciadores de la manipulación por medios artísticos, el del uso del documental por la Alemania nazi, el fomento de los superhéroes durante la guerra fría o, en orden inverso, del uso de la censura en casi todos los regímenes políticos.

No es difícil tampoco rastrear el esfuerzo dedicado por la CIA a establecer enlaces con Hollywood, disimulados como asesoramiento, e incluso planes concretos (y bastante conocidos) para mejorar la imagen de la propia agencia o del FBI, cuyo largo brazo tuvo su primera representación icónica en la película *G-Men*, de 1935, que luego se transformaría en serie y, a partir de entonces, en una larguísima lista de títulos dedicados a sobredimensionar la eficacia, honradez y otras cualidades del cuerpo.

En cuanto a la policía ibérica, las investigaciones publicadas sobre su papel, su trabajo cotidiano o cualquier otro aspecto relacionado con este ámbito son tan minoritarias como sesgadas hacia la glorificación o la mera propaganda. Es casi imposible conocer los detalles de este aspecto, pero nos da una pista el que la propia Policía Nacional declare en su web:

La Oficina de Comunicación de la Policía Nacional colabora de forma muy cercana con películas, series y producciones de todo tipo [...].

La Policía Nacional colabora habitualmente con la industria del cine, en especial, el policial... y especialmente, con el español. Son muchas las películas que han contado con el asesoramiento técnico policial de nuestros agentes, para que sea verosímil y tenga unos guiones de calidad.

Lo que la policía entienda por *guiones de calidad* se nos escapa, claro. Que asesore tratando de dar verosimilitud a un producto de ficción parece una vía para la selección de proyectos que vayan en esa *línea de calidad*.

Lo que resulta indiscutible es que la ficción se ha visto invadida por la presencia de personajes policiales de una forma abrumadora en los últimos años. Tal es así que resulta prácticamente imposible encontrar una serie, libro o película de éxito en la que las fuerzas de seguridad del Estado no jueguen un papel importante. Se ha creado, incluso, un subproducto televisivo dedicado en exclusiva al seguimiento de la labor policial (vista desde su punto de vista, lógicamente): *Policías en acción*, *091*, *Alerta policía*, *Policía internacional*, *Control de fronteras*, *Antidisturbios*... Una lista que crece, con el objetivo compartido de publicitar los aspectos heroicos de los dife-

rentes cuerpos y, de paso, justificar su absoluta necesidad ante la villanía generalizada de la población.

Como resultado de todo esto, se ha dado una conquista del imaginario colectivo por parte de la institución policial, que se basa en algunas claves que comparten todas estas ficciones, incluso las que se muestran críticas. Ojo, que al decir conquista del imaginario colectivo no defendemos la ramplona idea de que, al haber películas y series que los glorifican, la popularidad de la policía haya crecido. Más bien se trata de que la figura del guardia ocupa un lugar entre los héroes de ficción que no ocupa ninguna otra profesión, habiendo sustituido en parte a los mutantes o seres de otros mundos que representaban los superhéroes de la guerra fría. Hablamos, pues, de una colonización del mundo de ficción, con las consecuencias lógicas en cuanto a influencia, que nunca son absolutas.

En primer lugar, la presencia policial se hace indispensable en cualquier conflicto social e incluso personal. Da igual que se trate de una serie de asesinatos terribles o de una riña entre vecinos. El recurso a las instituciones armadas, la llamada a la autoridad uniformada, es la respuesta única. Si hay una situación de injusticia social, el cine pondrá como héroe a un policía. Si hay un conflicto personal de cualquier tipo, se recurrirá a la policía como mediadora. Si existe un riesgo, por mínimo que sea, se barajará la alternativa de avisar a la policía, bien como amenaza para que el mal retroceda ante la posibilidad de su llegada, bien como solución efectiva. Allá donde ocurra un roce, los protagonistas valorarán la acción policial como algo posible, nunca excesivo, nunca extraño.

Esa normalización de la intervención de las fuerzas de seguridad se traducirá, como indicábamos, en que buena parte de la pobla-

ción no sea capaz de considerar absurda la escena de un guardia bajando a un gato de un árbol. ¿De verdad hace falta un tipo con pistola para esto? ¿De verdad hay que hacer una llamada a un coche patrulla, habiendo vecinas y vecinos al lado? La banalidad del ejemplo, lejos de inutilizarlo, muestra la eficacia de extensión de la idea fuerza que hay detrás: allá donde exista un problema, hay que avisar a la policía.

En segundo lugar, estos nuevos productos culturales han convertido a la institución policial, a menudo, en la fuente de restauración del daño, del reequilibrio de la paz. Cualquiera que haya estudiado mínimamente los procedimientos para elaborar una historia ficticia sabe que el motor de estas es lo que se denomina *conflicto*. Ese conflicto es, ante todo, la puesta en marcha de obstáculos que impiden al o a la protagonista lograr su objetivo, sea este el que sea (desde lograr el amor de otra persona hasta la paz en el universo). Estos obstáculos pueden ser de diferente tipo. A veces jugará un papel importante el tiempo cronológico, otras las barreras físicas o climatológicas, la oposición de otros personajes, diferentes circunstancias sociales y todo lo que la imaginación de quien ande detrás de la trama dé de sí. No todos esos obstáculos suponen un daño. Si un personaje debe llegar a tiempo a una cita y se despierta tarde por no sonarle el despertador, por ejemplo, luchará contra el tiempo y las posibles consecuencias de su retraso respecto a la hora en que se ha comprometido a llegar. Pero, en el momento en que aparezcan obstáculos que representan un daño (la destrucción de objetos, el dolor físico, el extravío de seres inocentes...), aparecerá en primer o segundo plano la fuerza policial, siguiendo el modelo del rescatador

de gatos. La imagen de la policía queda vinculada sistemáticamente a la vuelta al equilibrio.

La tercera clave de esta avalancha de ficciones policiales es muy sencilla de detectar y ha hecho correr ríos de tinta. Se trata de cómo se acepta, en la lógica de estos productos, la violencia de las fuerzas de seguridad. Amenazas, golpes, armas encañonando personas, tortura psicológica o física... todo vale cuando el contexto que rodea a la acción lo justifica. El problema es la cantidad de contextos que justifican esto a diario en la proyección de cine y televisión. Los personajes de un sinfín de películas o series parecen vivir continuamente en una clase de ética para adolescentes en la que el profesor planteará el viejo dilema entre salvar vidas y torturar a una persona. Esta situación, que en la vida real se da muy raramente, parece ser la tónica habitual. El pobre policía, enfrentado a un mundo lleno de violentos enemigos de la sociedad, se ve obligado a utilizar métodos poco ortodoxos (al final acaban siendo los más ortodoxos, dada su extensión) para proteger a los inocentes. Curiosamente, la ficción está plagada de héroes policiales que se distinguen precisamente del resto de funcionarios por el uso de esa violencia que, además, es siempre más efectiva. El torturador, el chulo amenazante, el abusador de poder es el agente de la paz social. En su contra saltan a veces los burócratas que nada saben, los de asuntos *internos*, que persiguen al eficaz *desfazedor de entuertos* presionados por una opinión pública ingenua. Qué fácil es hablar desde un despacho; la calle te hace duro y peligroso y eso es necesario.

Una cuarta pieza del puzzle podría ser al mismo tiempo el marco en el que se integran todas las demás: la seguridad como valor absoluto. La ficción policial gira en torno a un solo objetivo, a una obse-

sión por la seguridad como única preocupación humana. Asesinos despiadados, violadores en serie, bandas de secuestradores, atracadores o mafiosos, todos tienen en común que amenazan, exclusivamente, la seguridad. La mentalidad policial, de la que hablaremos más adelante, pone el foco siempre en los comportamientos, independientemente de su causalidad y eso mismo transmite el discurso de los productos televisivos parapoliciales. No hay injusticia social, no hay desigualdad social ni existen problemas estructurales, ya que al final todo depende de una voluntad individual para hacer el mal que, lógicamente, debe ser frenado por la policía. Las múltiples dimensiones e intereses del ser humano quedan reducidas a una obsesión por la seguridad absoluta y a una preocupación por cuestiones que, en la vida real, raramente se nos presentarán. Explicado de otra manera: a la mayoría de la población es muchísimo más posible que se nos presente una situación de paro, de injusticia en el trabajo, de sexismo, de relaciones sociales difíciles u otras mil cuestiones que el hecho de que unos desalmados con acento de algún país más o menos lejano secuestren el avión en que vayamos de vacaciones.

No hay que preocuparse, por supuesto, porque, en esos casos extremos que parecen darse día sí día también en la pantalla, tenemos a la policía ficcional con su sexto rasgo: la eficacia absoluta. Da igual cómo se planee el espantoso crimen, cómo se intenten borrar las huellas, que siempre habrá un astuto policía o un novedoso sistema científico que descubra al criminal. Y, si no lo hay, siempre queda el recurso al guantazo fácil y rápido, que los malos confiesan. Es la combinación perfecta: plantear un mundo lleno de riesgos y unos profesionales imbatibles que no dejan resquicio al delincuente. «No se te ocurra intentar quebrantar la ley, porque no te vas a escapar», clama cada capítulo, cada película.

Habría riesgo de despersonalizar a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado si solo fueran agentes indestructibles, más o menos violentos, que comen donuts, intervienen allá donde hay un pequeño conflicto y siempre ganan. Así que, desde la famosa serie *Hill Street Blues* (*Canción triste de Hill Street*) venimos asistiendo a la necesidad de transmitir que los policías no son solo personajes, sino personas. Crear personajes con los que el espectador se pueda identificar, a pesar de que ninguno de nosotros viva algo remotamente similar en su quehacer diario, solo puede hacerse recurriendo a la esfera privada, al sufrimiento, la soledad y la presión que los policías muestran en la pantalla, héroes individuales e individualistas ignorados, cuando no marginados, por los desagradecidos a quienes quieren proteger. Condenados a relacionarse entre ellos en tugurios donde se juntan para ahogar en alcohol los sinsabores de ser el último valladar contra la barbarie.

La imagen del hombre policía, el héroe masculino como cima de las aspiraciones cierra este breve catálogo de condiciones para la ficción. Nadie puede discutir algo así. No existe alternativa a una sociedad policial. Si acaso, más policía, porque el mal acecha siempre y viene a por nosotros.

Así, en las últimas décadas, se ha dado un giro a la visión que proporcionaba la cultura sobre la labor policiaca. De brutos, a expertos científicos. De ignorantes, a psicólogos perspicaces. De torpes, a valientes y violentamente atractivos.

Puede que esto no sea suficiente para influir en una sociedad, para haber pasado del desprecio del siglo XIX a los gritos de «A por ellos» que se escucharon a la salida de los autobuses de antidisturbios que iban a poner orden en Cataluña en 2017, o a los aplausos

desde los balcones a los coches que se daban el paseo triunfal por las calles después de un día persiguiendo a los vecinos que habían salido a la calle en la epidemia de 2020. Sin duda, la operación para potenciar la imagen de la policía ha sido de mucho mayor calado, pero cada vez que encendemos la televisión o vemos la cartelera de un cine podemos encontrar una muestra de ese omnipresente discurso.

Capítulo 3
LA INVASIÓN SOCIAL

Es posible que hasta aquí todo parezca inofensivo, un divertimento, una cosa menor. ¿Qué más da si las novelas hablan o no de policías? ¿Qué importa si las películas o las series lo hacen? ¿No jugábamos de pequeños a ladrones y polis muchas de las personas que luego hemos sido suficientemente críticas con las instituciones sociales? ¿No es sencillamente una ficción, un juego?

Desde luego, algo ha debido suceder para que la policía haya escalado puestos en el prestigio social hasta convertirse en una de las instituciones más valoradas en cada estudio de opinión. Bien es verdad que siempre puede ponerse en duda el resultado de tales encuestas, pero parece peculiar que resulte más querida la labor policial que la política, la informativa o la de juez, por ejemplo. En todo caso, el tradicional desapego de las clases trabajadoras respecto a las fuerzas de seguridad ha menguado notablemente. A este cambio ha contribuido un plan específico de acercamiento de la policía a diferentes espacios en los que anteriormente no tenía cabida, tratando de mostrar una cara menos vinculada a la represión de la que generaciones anteriores tenían en mente.

En este sentido, la inversión a largo plazo se ha hecho minuciosamente, influyendo de manera especial en la infancia y la juventud. La mayor parte de las personas menores de 20 años que hubiera tenido contacto con la policía hasta finales del siglo pasado, seguramente relataría experiencias relacionadas con la función represiva: detenciones, recriminaciones, golpes en manifestaciones o, en todo caso, la necesidad de acudir a denunciar algún delito. Sin embargo, desde hace ya dos décadas es imposible que cualquier alumno de primaria haya podido evitar encontrarse en una o varias ocasiones con alguna de las formas policiales existentes.

La primera justificación para la presencia de guardias en las escuelas de Primaria (incluso en las de Infantil, algo admirable) fue la educación vial. Desembarcaban los uniformados en los colegios con un montón de conos y simulaciones de señales y semáforos y montaban un circuito para bicicletas con el ánimo de enseñar a los chavales a conocer las normas básicas de circulación, no fuera que les diese por recorrer la ciudad con sus triciclos y bicis por las carreteras a lo loco sin saber si está prohibido girar a la izquierda o si van por ahí sin luz de gálibo. De paso, se convencía a los que iban a pie de que cruzasen por los pasos de cebra. Todo ello en un espectáculo que aún hoy se pone en pie bajo la atenta mirada de los bienhechores armados, que usan todavía su silbato, aunque desconocemos si les quitan puntos de un imaginario carné de ciclista o alguna perversion similar.

Claro, todo esto era necesario porque ninguna maestra o maestro debía de conocer las normas de circulación (es notoria la aversión de esa gente hacia los motores) y porque montar un circuito con conos solo está al alcance de una fuerza organizada jerárquicamente

con gran disciplina y el apoyo de las armas. Desgraciadamente, no hay estudios sobre el grado de eficacia en cuanto a la disminución de mortalidad en carretera de estas campañas, que sepamos.

El caso es que «el día en el que viene la policía» se normalizó, pero resultaba claramente insuficiente.

Por lo tanto, las fuerzas de seguridad han aumentado poco a poco la frecuencia de sus visitas, la variedad de temas de su dominio y el número de etapas educativas a las que visitar. Si se habla de acoso escolar en las aulas, allá va una pareja de señores armados con pistola, porra, esposas y lo que se les ocurra que cuelgue de sus prodigiosos cinturones multibolsillo a explicar que la violencia es algo muy malo. Con cuatro reglas legales aprendidas, dan lecciones magistrales a la niñez y la chavalada sobre las consecuencias de acosar a compañeras o compañeros. Dejemos al margen la simplicidad de sus análisis y la relación que, en este campo, queda patente con su concepción de la justicia. El caso es que psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, pedagogos o los propios maestros quedan sustituidos por policías. Aquí nadie pidió el pin parental.¹

Y cuando en los centros se desea hacer una campaña preventiva sobre los abusos del alcohol y las drogas... ¡bingo! Patrulla rauda hacia el instituto. Ni médicos ni especialistas en salud o prevención. Otra pareja uniformada vendrá a decir que las drogas son muy malas y que si te pillan con ellas te caerá tal o cual sanción. A menudo, en los institutos de barrios obreros, las miradas de los

1. Pin parental: propuesta que provino desde la ultraderecha durante el año 2020 consistente en la obligatoriedad de que las familias den consentimiento para que sus hijos asistan a talleres o charlas impartidas en los centros educativos por personas que no sean los docentes habituales. Su objetivo era el control ideológico y la presión sobre aquellos contenidos que consideran perniciosos, como el feminismo.

chicos que consumen hachís se muestran burlonas. Estando en su terreno y creyéndose protegidos por la institución, espetan a los funcionarios armados: «Pues a mi colega le pillaron unos porros y no le pusieron nada. Solo le quitaron los porros y se los quedaron los maderos». Comienza la algarabía. Otros alumnos asienten. «¡Es verdad, tío!». «¡Mucho morro tenéis!» «¡A saber qué hacen con la droga que pillan!» «Buah, ¿tú qué crees?».

La pareja se desespera. No era esto lo que querían. Uno de ellos lanza la mano instintivamente a la cadera, donde lleva la defensa (eufemismo para llamar a la porra). En su ayuda, la profesora o el profesor de turno, que hace callar el aula. Miradas inquisitivas del alumnado. A ver qué dicen ahora. La respuesta, evasiva. «Tu amigo lo que tiene es que no llevar droga y no consumir, que sois muy críos». La gramática asesinada. La arbitrariedad al descubierto. Otra charla más, otro día más en la campaña por normalizar la presencia de la policía en un entorno educativo.

La policía sabe de la importancia de la red de escuelas obligatorias y se ofrece incluso (o amenaza, según se interprete) a ir a buscar a los chavales que no asistan con regularidad. Se supone que las familias reaccionarán asustadas ante la imagen del coche con sirenas y su hijo llegando al colegio como un delincuente. Hasta ese punto ha llegado la presencia de las fuerzas del orden.

Por supuesto, el problema de la violencia de género ha sido un tema importante en los colegios y, sobre todo, los institutos. Pues también la policía, con su enciclopédico conocimiento, acude a reparar sabiduría. Explican lo que es la violencia de género y, lógicamente, se centran en las repercusiones penales, mezcladas con cuatro eslóganes de manual. La retórica no es su fuerte en la mayor parte

de los casos. Han sido seleccionados para su cargo por otros motivos y su tarea no era convertirse en Séneca con gorra de plato. Pero resuelven la situación entre el aburrimiento masivo de la juventud, que dedica su rato a pensar en otras cosas, a intentar ver de cerca la pistola o a esperar el turno de participación (la innovación educativa no es tampoco prioritaria) para, al menos, conversar en grupo. Ahí queda: la policía es el garante de la justicia en este terreno también. Siempre están del lado de los buenos.

Para no extendernos con decenas de ejemplos, vamos al final de los estudios obligatorios. El alumnado tiene que elegir qué será de mayor, se supone. Como si en el mundo que vivimos se pudiera elegir profesión de manera definitiva. Se montan ferias educativas, exposiciones donde universidades, empresas de formación profesional, empresas de gestión de estudios en el extranjero, academias artísticas, centros de formación deportiva y otras opciones conviven con... claro, la policía. Una salida profesional más. Un trabajo como otro cualquiera, pero a la vez especial. Se les nota a los guardias el orgullo de ser los salvadores del país, no como el resto de oficios («Fíjate, en ese stand de allí hay incluso titiriteros, como si lo suyo fuera un trabajo serio.»). Entregan miles de folletos, muestran sus motos, sus coches, el helicóptero, las armas no, que no les dejan, el material antidisturbios tampoco, es una pena. Con lo bien que quedaría una pantomima como las prácticas de la comisaría de Moratalaz.²

2. La comisaría de policía nacional situada en el barrio madrileño de Moratalaz es, además de centro de detención, zona de acuartelamiento de las unidades antidisturbios. Desde hace muchos años, en su interior se realizan prácticas para reprimir manifestaciones, en las que unos policías actúan como tales y otros como manifestantes. Algunos vecinos afirman que, a veces, el exceso de celo ha provocado roces de verdad entre ambos grupos.

Hemos hecho el recorrido entero. A los cinco años, un alumno vio a la policía por primera vez en su colegio. A los 16, se ha reencontrado con quienes le han enseñado cosas fundamentales: que hay que ser cívicos y conducir bien o cruzar cuando el semáforo esté en verde para los peatones, que no hay que drogarse, que no se debe maltratar a los compañeros, que hay que ir a clase, que hay que tener cuidado en las redes sociales o que el maltrato de género es un delito grave. Ahora le ofrecen un trabajo estable, con exigencia física pero en defensa de la justicia. Con vistosos uniformes, vehículos con luces y armas molonas. Algo pescarán.

Tenemos ya una invasión masiva de la ficción, del terreno de la cultura y del espacio educativo. Es casi imposible vivir sin encontrarse con la hiperbolizada importancia de la policía. Pero solo casi. Podría haber alguien que pasó hace mucho por la escuela, en los tiempos en los que los guardias no entraban en sus recintos y se limitaban a patrullar para que no nos dieran aquellos míticos caramelos con droga que nadie pudo probar nunca, aunque algunos lo esperaran con una mezcla de impaciencia y fe. Supongamos ahí la eficacia policial.

También podría alguien despreciar las series, las películas, no hacerles caso, dedicarse a la lectura de los clásicos griegos en exclusiva o, más plausible, sencillamente pasar olímpicamente de esas ficciones. Podría ser. Habría entonces que pensar sobre cómo aprenden las personas el funcionamiento del mundo que los rodea, cómo construyen las categorías de buenos y malos. Cómo interpretan las tensiones sociales. Cómo digieren las noticias. Eso es. Las noticias.

Al comienzo de la mayor crisis sanitaria que muchas personas hemos vivido, la generada por el coronavirus en el año 2020, apa-

recían de manera diaria los responsables del gobierno para describir la situación y dar las órdenes que consideraban oportunas. En pantalla, algún cargo político. Van rotando. A su lado, el coordinador sanitario. Este no cambia. Tampoco otros tres hombres. Muy cerca, cargados de medallas, un comisario de la Policía Nacional y un teniente de la Guardia Civil al borde de la jubilación (su honor y lealtad inquebrantables le hicieron posponer el retiro). Además, un general del ejército. Poca gente se pregunta qué pintan ahí esos señores hablando cada día de que han detenido a un paisano que andaba por la playa a solas, usando para la hazaña un helicóptero y cuatro policías, o que los vecinos de una aldea gallega reciben el correo gracias al esfuerzo del policía local del pueblo más cercano.

Poca gente se plantea qué pintan esas anécdotas de taberna en una situación tan grave. Poca gente se indigna de que, ante un virus, se siente en primera fila a los policías y militares, cuyas atribuciones son ajenas al ámbito de la salud.

Cada pequeña acción policial o del ejército es glosada como una nueva batalla de Covadonga, eso sí. Gracias a su disciplina y formación técnica han limpiado tres edificios y cien calles. Como cualquier equipo de limpieza haría si dispusiera de equipos de protección individual y el material de limpieza, solo que los militares lo hacen más despacito y con la posibilidad de que los arresten si no saludan al mando que pase por allí.

Un coche policial ha ido a ver a un niño que cumplía años, ha puesto las sirenas a tope y le ha llevado globos. Conmovedor. Nadie haría nada por los niños si no fuera por la policía. Curiosamente, al mismo tiempo que se representan esas comedietas, los ayuntamientos cierran por motivos peregrinos las iniciativas de centenares de

vecinos para repartir comida entre familias en paro y sin recursos. La policía acude también a los cierres o se avisa de que lo hará, pero esto no sale en las noticias.

Otros militares montan un hospital. Como cualquier cuadrilla de la construcción podría hacerlo si le dieran los recursos, porque los conocimientos los tienen de sobra. Pero si lo hace el ejército parece que hubieran levantado la catedral de León en 16 horas. Una hazaña al alcance de superhombres.

Otros reciben una formación ultraespecializada para hacer llamadas telefónicas y preguntar a los que tienen la enfermedad con quiénes han estado los días anteriores. Los llaman *Rastreadores* porque el nombre de *Vengadores* ya estaba pillado.

Se configura la imagen de los héroes policiales y militares. O más bien se refuerza. Claro que, analizadas, sus acciones son asequibles y podrían haberlas desarrollado albañiles, electricistas, telefonistas de cualquier *call center*, personal de limpieza... Excepto las detenciones y las multas, que ocupan un lugar preeminente en cada apertura de telediario (el cierre se reserva para las visitas policiales a niños, los bailes de los guardias para animar a los jubilados de algún pueblo y otras acciones humanitarias).

Pero, ¿quién grabó a los policías que detenían al solitario paseante de la playa? ¿Quién envió a todas las televisiones las imágenes?

Tampoco hay que ser perspicaces detectives para averiguarlo. Lógicamente, es la propia policía a través de sus gabinetes de prensa. En el caso de la Guardia Civil, se encarga la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales, dependiente del llamado Gabinete Técnico que, según su propaganda, tiene como objetivos gestionar la comunicación externa y potenciar la imagen del cuerpo. Para ello, incluso

han creado un premio periodístico dotado de 12.000 euros para quienes difundan mejor su tarea. En un vídeo promocional del propio instituto armado definen la información como «presentar noticias capaces de tomar una decisión o modificar otra tomada con anterioridad». Una definición extraña. La información no es conocimiento. Es decisión. Es influencia.

La Policía Nacional tiene, por supuesto, su oficina de prensa y relaciones informativas, de la que dependen los diferentes gabinetes de prensa. También tiene su premio anual para los periodistas que analicen mejor la labor de su cuerpo según el criterio del jurado, por supuesto, que en este caso pertenece a la denominada Fundación Policía Española. Hay que señalar que este premio ha tenido más éxito que el que convocaron para los propios policías bajo el nombre *Concurso literario policía y cultura*, que tenía como objetivo combatir la idea más o menos extendida de que la cultura y la policía son realidades que no suelen coincidir. El concurso duró solo 3 años. Sin intención de desviarnos del tema demasiado, pero sí de ir apuntando alguna curiosidad, la tal fundación tiene como patronos a Ignacio Cosidó, miembro del Partido Popular que anda en el momento de escribir este libro enredado en un asunto judicial relacionado con tramas policiales; Pedro Díaz Pintado, que pasó de ser jefe policial a empresario inmobiliario salpicado por la Operación Púnica, entre otras; Félix Simón, comisario que ha ostentado cargos de diferentes responsabilidad desde los años 80. Como jurados del premio, invitan a Manuel Marlasca, un periodista que aparece en televisión con cierta frecuencia para adornar programas tremendistas sobre sucesos o Mario Hernández, que hace las veces de director gerente y que es al tiempo jefe del área de publicaciones de la Policía Nacional y

director de alguna publicación como *Ciencia policial*. Una fundación un poco endogámica, quizá.

El caso es que estos gabinetes han ido haciendo cada vez un trabajo más importante y, hay que admitirlo, eficaz. Han dotado a las fuerzas del orden de un perfil diferente, basado en la exposición de los rostros amables de los portavoces que se eligen (curiosamente, el peso de las mujeres en este campo es importante). Han logrado montar perfiles en redes sociales seguidos por miles de personas (supongamos que no son *bots*). Pero, por encima de todo, han generado realidad.

Cada día, un grupo de policías se sienta delante de sus ordenadores como si se tratase de una agencia de noticias y redacta contenidos para todos los medios de comunicación. Algunos de esos contenidos tienen el apoyo de las impactantes imágenes logradas por los agentes durante sus intervenciones: la entrada en casas de presuntos narcotraficantes, las mesas con alijos de armas, la intercepción de pateras en medio del mar... Un carrusel irresistible de acción y justicia juntas, que los medios suministran sin filtrar.

La versión policial de una noticia prevalece sobre otras por diferentes motivos, entre los cuales está el que los propios medios carezcan, cada vez más, de plantillas que puedan cubrir lo que sucede en la calle. Sin embargo, no hay duda de que ese continuo goteo de heroicidades policiales genera una visión del mundo ajustada a la que proporcionan los citados gabinetes de prensa: por un lado, los malos; por otro, los buenos, que son los policías. Sin matices, sin motivos, sin análisis. Pura acción digerible. De esta forma, los medios y sus trabajadores viven entre la obligación de recurrir a la versión de las fuerzas de seguridad y la comodidad que esto produce.

Entre los méritos de la labor de comunicación policial está el haber logrado identificar cada operativo con un peculiar nombre. La difusión de las diferentes actuaciones con esos pegadizos nombres a partir de los años 90 del siglo XX fue un logro. Permitía hablar de diferentes realidades accediendo a ellas bajo la lógica policial. El problema de la droga se transformaba en una red de mafiosos malvados perseguidos por unos ángeles (custodios) vestidos de uniforme en la Operación Nécora. La extracción de la riqueza generada por la clase trabajadora realizada sistemáticamente por la clase política asociada a las grandes empresas, se convertía en una operación contra un señor con abrigo y gomina que, casi de casualidad, pertenecía a un partido político. Las redes de explotación sexual de mujeres, vinculadas a una visión patriarcal y a menudo relacionadas con empresarios de extrema derecha, otro nombrecito y otros salvadores uniformados.

Pero al mismo tiempo, convertía a las fuerzas policiales en generadoras de opinión. Cada operación va acompañada de una documentación preparada para la prensa; documentación más profusa cada vez y que, en lenguaje cercano a lo jurídico, mezcla resultados de investigaciones con presunciones y, a menudo, opiniones con mayor o menor fundamento. Todo ello con el aura de misterio que aparenta filtración de documentos, como si la información policial fuese alto secreto dirigida en exclusiva a los jueces y, gracias a la pericia periodística, acabase en su pantalla amiga, querido telespectador.

Prácticamente como jueces de instrucción y periodistas de investigación un tanto sensacionalistas al tiempo, los gabinetes de prensa difunden sus operaciones acompañadas de valoraciones sub-

jetivas y suposiciones, que se publican sin dudar y casi nunca son desmentidas. Hacer un recorrido por los comunicados policiales respecto al supuesto terrorismo anarquista en los últimos diez años, por ejemplo, sería una forma de comprobar esa mezcla de presumibles conocimientos de investigación y alarmismo sin fundamento, que los propios jueces (poco sospechosos de estar a favor del comunismo libertario) han ido tirando por el suelo una y otra vez. Como es lógico, en una portada queda bien un titular anunciando la *internacional terrorista negra*. Debe de quedar peor un titular que diga que esa internacional era un invento policial, porque no lo hemos visto nunca. Calumnia, que algo queda, que decían, porque tampoco hemos visto nunca a un portavoz policial entonar el «lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir».

La presencia de las fuerzas de seguridad en los medios culturales, educativos y comunicativos ha sido esencial para generar una nueva opinión sobre las mismas. Sin embargo, hablamos de ámbitos simbólicos, es decir, ámbitos que influyen en el pensamiento, que incluso lo generan, pero a partir de acciones que no modifican sustancialmente la acción policial. Dicho de otra forma, lo que hemos venido explicando hasta ahora solamente es la invención de una imagen, la modificación de un perfil público, un mundo virtual, si se quiere.

No obstante, esto es insuficiente para las fuerzas del orden y para quienes están detrás del aparato policial. Consideradas a sí mismas como la fuerza de salvación de la sociedad, no han cesado de solicitar, desde la transición, un aumento de sus atribuciones. Por ejemplo, la policía pasa de ejecutar las órdenes de las autoridades, según la Ley Orgánica que las rige en 1986, a proponer planes de actuación al Secretario de Estado, según el Real Decreto de 2017.

Esto sucede en las altas esferas, pero en su práctica cotidiana la policía ha ido ampliando su campo de actuación al tiempo que, de manera a menudo informal, reclamaba un margen de maniobra mayor. Sin que nadie levantase la voz por ello, ocurría en detrimento de otras instituciones no policiales, como Protección Civil, que se ha ido diluyendo poco a poco, o de las propias tareas sociales, de lo que hablaremos más adelante.

La policía, a lo largo del último tercio del siglo XX, fue asumiendo atribuciones y creando nuevas especialidades: el control del espacio aéreo por medio de helicópteros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, con sus especialidades creadas en los años 70; el control de las aguas marítimas y la creación de la consiguiente sección de la Guardia Civil (con el estreno de sus barcos en 1992); grupos de rescate de montaña de la Guardia Civil, creados a partir del cambio de nombre de los franquistas grupos de control de los Pirineos en los años 80; atribuciones como las citadas cuando hablamos del ámbito educativo; control de redes sociales e Internet y un largo etcétera.

Esto no solo ha supuesto un salto de la invasión social a nivel simbólico al ámbito de la realidad tangente, de la presencia y actuaciones de carne y hueso. Cada vez con más frentes abiertos, la constante reivindicación de atribuciones y medios materiales ha configurado la mentalidad policial, promoviendo una cultura que defiende que los cuerpos de seguridad del Estado viven con las manos atadas y sin recursos y que, si otro fuera el caso, muchos problemas tendrían fácil solución. El «porque me están sujetando» de las peleas de barrio de toda la vida.

De esta forma, no es difícil encontrarse con policías que reclaman más horas de detención en comisaría («una semanita en comi-

saría y se le quitaban las ganas de volver a las andadas»), penas más duras para delitos de poca monta («nosotros lo detenemos y los jueces los sueltan»), intervenir en espacios en los que todavía no lo hacen («ahí vamos nosotros y lo solucionamos en dos días») o la defensa de leyes como la conocida como *Ley mordaza*, que prácticamente posibilita que un agente detenga, instruya, juzgue y sancione en un proceso de 3 minutos. Justicia exprés al servicio del criterio de la patrulla.

Por otro lado, la extensión de las atribuciones y la presencia policial han servido para que el objetivo de su ocupación de las calles refuerce el mundo simbólico de control del orden. Un cuerpo que puede reprimir cualquier comportamiento, actitud o incluso pensamiento que esté dentro de sus indefinidas funciones es un cuerpo de una fuerza simbólica apabullante. Al pasar a su lado, siempre serás sospechoso. Como quien pasa un arco detector de metales temiendo que le piten las monedas del bolsillo, aun conociendo su inocencia.

Ya en la ley de 1986 se defendía explícitamente esta arbitrariedad:

La seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, toda vez que no permite delimitaciones o definiciones con el rigor y precisión admisibles en otras materias. Ello es así porque las normas ordenadoras de la seguridad pública no contemplan realidades físicas tangibles, sino eventos meramente previstos para el futuro, respecto a los cuales se ignora el momento, el lugar, la importancia y, en general, las circunstancias y condiciones de aparición.

Dicho de otra forma: una función de la policía es garantizar la seguridad pública. «¿Y eso qué es?». «Pues ya lo iremos viendo sobre la marcha».

Recordamos además que, en el momento de escribir este libro, «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad» se consideran infracción leve, lo que significa que un guardia puede incoar un expediente que terminaría con la multa prevista, desde los 100 hasta los 600 euros, si considera que alguien falta al respeto a la policía. Será un juez quien decida, pero recordemos también que la policía tiene *presunción de veracidad*, lo que significa que, en los casos típicos de *mi palabra contra la tuya*, tú sales perdiendo. Al policía se le presupone sincero. A ti no.

De momento, ya se conocen varios casos de propuesta de sanción policial a personas que vestían prendas de ropa en las que figuraban lemas como *All Cats Are Beautiful*, que los agentes interpretaron como una provocativa versión de un lema original que sí significaría una falta de respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad.

¿De qué manera afecta a la seguridad ciudadana que alguien lleve una camiseta que insulte a la policía (en caso de que así fuera)? ¿Qué derechos o libertades pone en riesgo que alguien grite a unos agentes maldiciones o blasfemias? ¿Cómo saber si un evento público en el que se está participando socava la seguridad pública que la policía mantiene? ¿Es una manifestación para la que no se ha solicitado permiso un atentado a la convivencia?

Sin ánimo de profundizar en filosofía del derecho, algo que queda un tanto fuera de la intención de este texto, vamos viendo que en el modelo policial contemporáneo ha ido pasando a tener un gran peso el mantenimiento del orden, sea lo que sea este. Si a

lo largo del siglo XIX y primer tercio del XX este orden se identificaba claramente con el orden burgués, de manera que quienes lo interrumpían eran, fundamentalmente, los movimientos obreros; si durante el franquismo el orden estaba definido por los parámetros de la dictadura nacional católica y quienes lo alteraban eran, fundamentalmente, los movimientos antifranquistas de diferente extracción; ahora, en los albores del siglo XXI, el concepto de orden se ha vuelto más impreciso aún, abarcando a toda la población como susceptible de interrumpirlo o violarlo y a cualquier comportamiento que se salga de lo mayoritario como susceptible de ser reprendido o sancionado.

Lógicamente, esto no significa que la policía se pase la jornada reconviniendo a ciudadanos o proponiendo sanciones de manera continua. En primer lugar, el sesgo en la selección de presuntos delincuentes lo examinaremos más adelante, pero queda apuntado. En segundo lugar, los criterios para determinar comportamientos reprimibles también están asociados a unos prejuicios. Serán más provocativos para el orden social unos jóvenes migrantes bailando y cantando en la calle que un grupo de varones autóctonos de mediana edad atronando con sus coches en medio de la ciudad porque alguien no arranca dos segundos después de cambiar un semáforo, por ejemplo. Unos serán reconvenidos; ante los otros, se girará la cabeza.

Aun así, las consecuencias de la extensión de atribuciones y presencia de las fuerzas del orden no son exclusivamente las intervenciones masivas. Por una parte, nos hemos acostumbrado a la presencia de individuos armados pertenecientes a estos cuerpos en espacios donde antes era inimaginable. Esto supone que la presencia simbólica del poder político, bajo la promesa de seguridad,

ha cobrado también nuevas dimensiones, dulcificando el papel de quienes ostentan, presumiblemente, el rol de ejercer directamente el monopolio de la violencia.

Además, a imitación de la ficción, se ha extendido su papel social a asuntos de lo más dispar, como hemos venido explicando en este capítulo. Ese aumento de papeles dota a las fuerzas policiales de la necesidad que, cuando sus atribuciones se vinculaban a los aspectos represivos y de protección del sistema, no representaban. Así, resulta cada vez más complejo elaborar una teoría crítica sobre la institución policial, dado que su extensión ha llegado a tocar aspectos que resultan positivos para cualquier sociedad. ¿Quién analizaría de manera crítica a un grupo que salva montañeros, felicita cumpleaños a niños aislados o lleva cartas a las ancianas de una aldea?

El bando de los buenos ha quedado definido y, con él, una idea de justicia: la idea policial de justicia, que ha preparado el terreno para una sociedad que exige medidas cada vez más represivas para actos más nimios. Detengámonos para reflexionar sobre esta mentalidad de agente.

Capítulo 4
JUSTICIA POLICIAL

La definición clásica de justicia, que se vincula a Aristóteles, es la de que cada cual reciba lo que merezca. Dicho así, parece indiscutible, pero prácticamente todas las personas que reflexionan sobre este enunciado general llegan rápidamente a la pregunta básica: «¿Qué es lo que se merece cada cual?»

Para dar una respuesta a esa pregunta radical, antes hay que tratar de dar respuesta a otras preguntas que son más complejas aún. Si cada cual recibe lo que merece, es obvio que hay que determinar qué es lo que merece cada uno. Para determinar esto, habrá que atribuir al sujeto de justicia un peso en sus acciones o en sus intenciones, que serán las que permitan valorar el merecimiento en cuestión. Hay un dilema clásico para esto.

Imaginemos que una persona está jugando a lanzar piedras a un río y, por casualidad, golpea con una en un ojo a otra persona, dejándola sin visión de forma irreversible.

Ahora, imaginemos que dos personas pelean a pedradas y una de ellas hiere a la otra de la misma forma que en el primer caso.

¿Merecen lo mismo ambos apedreadores? Si la respuesta es que sí, lo que valoramos a la hora de repartir justicia es exclusivamente el resultado, las consecuencias. Si la respuesta es que no, estamos valorando la intención, entendiendo que hay acciones cuyo resultado es imprevisto.

Además, en caso de que consideremos que una y otra situación tienen las diferencias suficientes como para que se entienda que lo que merecen las personas implicadas también debe ser diferente, estaremos, implícitamente, haciendo referencia al concepto de *responsabilidad*. Seguramente, entenderemos que la responsabilidad del primer individuo en las consecuencias de su acto son menores, dado que la acción final, la de dejar tuerta a una persona por una pedrada, no ha sido libremente elegida, mientras en el segundo caso, al menos había una intención de herir.

Por último, podemos imaginar que las dos personas tienen, además, una diferencia. La primera podría ser un niño o una niña de 10 años y la segunda una persona adulta. Sería algo lógico que mucha gente, al conocer estos datos, reforzase la idea de la falta de responsabilidad en el primer caso, pues probablemente la capacidad del niño de prever las posibles consecuencias de su lanzamiento era menor que la del adulto, cuyos conocimientos sobre las posibilidades de una pedrada serían mayores y cuya capacidad de planificación sería más precisa. Incluso es bastante probable que se mire al niño con cierta indulgencia, atendiendo a otras características que se asocian a la edad (necesidad de juego, impulsividad, falta de previsión, etc.). Más allá de si esta indulgencia es paternalista o adultocentrista, nos interesa el hecho de que, sin duda, se tendrían en cuenta las peculiaridades del crío a la hora de determinar *lo que merece*.

Sigamos con el ejemplo, utilizándolo para explicar un modelo de justicia, pero antes aclaremos algo. Estamos jugando ya con las cartas viciadas, avisamos, porque estamos asumiendo que la justicia, en este caso, podría corresponder a la aplicación de una reparación o a la de una consecuencia negativa (una punición). Más tarde entraremos en esto, pero, de momento, juguemos en ese tablero que indica que la justicia puede ser la imposición de consecuencias ante los actos.

Hasta aquí hemos visto que lo que se merezca cada cual estará determinado por cómo se juzgue el acto que traerá la consecuencia (una pedrada con resultado de pérdida de un ojo se suele juzgar como un acto bastante negativo); la intencionalidad del acto (quien deja a alguien tuerto con intención sería más responsable que quien lo hace por casualidad); la libertad con la cual se comete la acción (cuando existen menos opciones de decidir, se considera que existe menos responsabilidad) y las características que tenga la persona implicada.

Una concepción de la justicia medianamente sensible a los problemas sociales tiene estos factores en cuenta, así como, al menos, otros dos: las condiciones sociales en las que se desarrollan los individuos y su relación con las acciones (en el ejemplo solamente teníamos en cuenta el aspecto individual) y la repercusión social de los actos (las consecuencias que tienen no solo para los individuos implicados, sino para la comunidad).

¿Es posible que la mentalidad policial tenga en cuenta estos factores? ¿No conviven los policías con los sectores más desfavorecidos, a los que a menudo conocen? ¿No se dedican fundamentalmente al trato con personas en situaciones límite? ¿No poseen conocimientos de filosofía jurídica suficientes, así como de leyes, para tener una idea global y radical de la justicia?

La respuesta generalizada a estas preguntas es que no. Reforzados por quienes patrullan por ciudades y pueblos, la idea policial de justicia bascula a menudo entre las teorías liberales extremas y el comentario de foro de Internet. Respecto al segundo, para que se entienda mejor, haga el lector el ejercicio de imaginar de nuevo. Imagine el titular de un periódico: «Una mujer pierde un ojo tras recibir la pedrada de un niño de 11 años». Imagine entrar en los comentarios de la noticia. Elija entre: «Yo le arrancaba al niño otro ojo, para que aprenda». «Cada día son más salvajes los niños. Y, claro, no le pasará nada porque es menor». «Al niño, un encierro en casa de dos o tres años y a los padres, una multa para que aprendan a dejar solo al crío diabólico ese». A esto nos referimos.

Ese tipo de comentarios representan un modelo de justicia, a pesar de lo infame de su redacción (en este caso, imaginaria, pero no muy difícil de reconocer en la realidad). Y en ese modelo coinciden los centros de pensamiento neoliberal y la policía. A menudo sin saberlo, claro. No insinuamos que los agentes dediquen su tiempo libre a leer a Von Mises, Rothbard, Hayek o Jordan Peterson. Por favor, no. Pero sí que coinciden en sus planteamientos básicos.

La raíz principal sobre la que se edifica ese complejo de justicia coincidente es la de la libre elección, sin contexto. Cada cual, según las posiciones neoliberales, elige su camino por medio de un proceso de cálculo racional sobre sus consecuencias. De manera similar al funcionamiento de su idea de mercado, cada individuo tiene el margen de actuación que se permite a sí mismo, pudiendo establecer mediante ese cálculo el peso de las consecuencias de sus acciones y, por tanto, decidir libremente.

El modelo policial no tiene ese enfoque teórico mitológico de los pensadores liberales (porque la idea de mercado libre no deja de ser como un animal mitológico, que no ha existido nunca pero que los teóricos del capitalismo insisten en afirmar). Los policías están en la calle y en la calle ven a personas que, según su criterio, hacen el mal. Incluso, a veces, repetidamente, a pesar de que sean detenidas, multadas o encarceladas. Sin duda, esto expresa una voluntad. Si no son capaces de corregir su comportamiento es que lo han elegido. Es que son así. Y no van a cambiar. Existen los delincuentes y los ciudadanos. Una línea clara los separa. Por qué esto sea así no es relevante, porque no ayuda a la acción, que es la base para la construcción del ideario.

Por tanto, recogiendo el ejemplo, para el modelo de justicia policial es indiferente, en principio, si quien ha tirado la piedra lo ha hecho con intención o no, con mayor o menor libertad, con unas características individuales o sociales de un tipo u otro e incluso la repercusión que pueda tener el acto en la comunidad.

Todo se simplifica en la máxima «quien altera el orden merece castigo». Además, si puede ser, un castigo cada vez mayor, alentado por los medios de comunicación y por las propias instancias policiales que, como hemos venido señalando, se autoerigen en el muro de contención ante la barbarie, quejándose de que en el inexpugnable fuerte que construyen día a día para salvaguardarnos, políticos, jueces y perroflautas (así, en una especie de mezcla informe donde solo hay un *nosotros* y un *ellos*, que incluye a todo el que no comulgue con sus propuestas) se empeñan en construir puertas por las que los delincuentes entran y salen a sus anchas. Ay, si les dejases a ellos, qué bonito fascismo les iba a quedar, qué seguridad absoluta.

Por tanto, lo que se merece cada cual, el concepto del que partíamos, es al final una cuestión de cálculo sencillo. Cortos de imaginación y de análisis, su modelo de justicia sería como una tabla de multiplicar: cuatro por cuatro, dieciséis. Robo, dos años; estafa, diez (o los que sean).

Reconocemos que esta fórmula no es una novedad en los cuerpos policiales, que siempre se han caracterizado por ese esquema maniqueo de buenos y malos, porra y cárcel. Lo que es novedoso es que esa idea haya superado el marco de la mentalidad policial para extenderse a otras esferas sociales. La derrota material y cultural de la izquierda en sus diferentes variantes es tan estrepitosa que hasta en este campo se ha visto afectada.

Porque hay que entender que esta estrategia justiciera carece del concepto fundamental que se ha defendido en cualquier teoría de la justicia que quiera alcanzar el rango de algo respetable: la universalidad. Dicho de otra forma: el intento de construir un modelo que sea de común aplicación a quienes se vean afectados por él. Para la justicia policial, no hay universalidad, pues unos delitos están más presentes que otros y, sobre todo, hay unos colectivos más *respetables* que otros.

La abrumadora presencia policial en los medios de comunicación está mayoritariamente vinculada con delitos que protagonizan los sectores más pauperizados de la población, como el ataque a la propiedad privada o el consumo de drogas. Pareciera, escuchando a las autoridades policiales por medio de sus portavoces periodistas, que el saqueo de riqueza al que se ha sometido al mundo es obra de quienes roban carteras en la plaza de una ciudad, quienes estrellan un coche contra un escaparate o quienes se dedican al tráfico

de cocaína. Al contrario, a pesar de que la *ingeniería financiera* de grandes empresas y empresarios (que es una manera fina de decir *trampas para acumular riqueza*) supone un robo de montante mayor y bastante frecuente, los sucesos no se llenan de este tipo de delincuencia. Como consecuencia, no se hinchan las venas de los tertulianos ni de los voceros policiales pidiendo medidas drásticas, cárcel sin demora, o expulsión del país para el empresariado no nacido aquí. Eso se deja para los pobres.

Es por eso que, detrás de la idea de que cada cual es responsable de lo que hace, sin referencias ni marcos explicativos, hay una exageración del papel destructivo de una capa de la población, una justicia clasista, digámoslo de una vez.

El ejemplo que más claro nos puede hacer ver esto es la insistencia a lo largo de los años 2020 y 2021 de la peligrosidad de bandas de *okupas*. Los gabinetes de comunicación policial han volcado sus informaciones sobre este hecho en los medios, que las han transmitido como si se tratase de una plaga milenarista, como si en cada calle hubiera una agencia de *okupación* tomando nota de los horarios del vecindario para asaltar domicilios en cuanto alguien tarde más de la cuenta en volver de sacar al perro. Además, se han resaltado sistemáticamente problemas de convivencia con esos desalmados *okupas*, que agrede a vecinos, mantienen comportamientos incívicos y se tirotean entre ellos día sí y día no. Incluso los autodenominados *sindicatos* policiales reclamaron al ministro de Interior instrucciones, porque los pobres no sabían qué hacer si llegaban a la puerta de una *okupación* de estas (en el caso de las que se llamaban antes *okupaciones* o *centros sociales* sí que lo sabían: tirar la puerta, entrar con violencia a eso de las 7 de la mañana y dejar aquello como un solar

solía ser un procedimiento bastante estandarizado, lo que se llama un *protocolo*). Esto ha acabado poniendo el foco en un problema minoritario (que no significa que a quien le afecte no le parezca muy grave), que además ha sido convenientemente manipulado por sectores interesados en el mercado inmobiliario. Al realizar las estadísticas, se mezclan allanamientos (que es la entrada en viviendas habituales) con usurpaciones (que es el uso de edificios o viviendas sin uso); viviendas particulares con redes de pisos de propiedad bancaria o de fondos de inversión; *okupaciones* sin conflicto alguno (ampliamente mayoritarias) con otras conflictivas; *okupaciones* que suponen quedarse en una casa que un banco quiere desalojar con otras que no tienen nada que ver... Al final, la idea que se quiere transmitir es obvia: el problema de la vivienda es la *okupación*. El problema no es que haya gente sin vivienda, sino que entidades que las acumulan puedan ver *okupada* una de ellas. No es, desde luego, la especulación del suelo, ni los desalojos a manos de bancos que implican quedarse sin vivienda pero con una deuda acumulada, ni el desembarco masivo de fondos de inversión que ha convertido zonas de las ciudades en hostales clandestinos para turistas, aumentando el precio de alquileres. Nada de eso. Que existan más de 3 millones de viviendas vacías y, sin embargo, las posibilidades de pagar un alquiler con un solo salario sean escasas, no es un problema de justicia. El problema es el miedo que genera a la clase media la existencia de delitos que le pueden afectar. De delitos que no protagonicen los ricos, claro. Ese es el concepto de justicia clasista. Esperamos todavía ver a una portavoz de la Policía Nacional salir a dar una rueda de prensa diciendo: «Se ha detenido a un peligroso fondo buitre que realizaba lanzamientos de personas de edad avanzada, usando el

procedimiento ilícito de la usura. En su poder se han encontrado diferentes manuales jurídicos para evitar sanciones, así como discos duros en los que almacenaban información sobre sus víctimas y planes para extender su actividad a diferentes ciudades». Si esto sucede antes de la publicación de este texto, lo reeditaremos incluyendo una fe de erratas.

¿Entonces no hay crímenes, no hay delitos que perjudican? ¿Solo los que hacen los ricos? Por supuesto que no. Hay acciones (llamémoslas crímenes, delitos o como queramos) que afectan muy negativamente a la sociedad, a la comunidad. Algunas, además, son éticamente repugnantes. Cualquier hecho que ponga en entredicho la vida humana o su libertad es, para una persona que desee una sociedad más justa, algo rechazable. Es más que posible que el concepto de seguridad (hablaremos más adelante) haya jugado un papel insignificante en el desarrollo de las diferentes teorías y prácticas revolucionarias, y que este factor deba ser tenido en cuenta, porque nadie quiere vivir con miedo. Pero lo que destacamos en este análisis es que, a menudo, ese miedo es construido por medio de una serie de instituciones, entre las cuales está la policía, que es un miedo que corresponde a una visión de clase social y que es, esencialmente, sesgado. Tiene razón el que ya es un lugar común que dice que es más probable que nos afecten depresiones económicas, pobreza, problemas de salud, de acceso a la educación o de precariedad laboral y vital que el hecho de que nos ocupen la casa. Es más probable que nos repongamos de un atraco callejero que del paro de larga duración más allá de los 50 años. Es muchísimo más probable que una empresa telefónica o un banco nos engañe que el hecho de que unos menores venidos desde centenares de kilómetros nos falten al

respeto o nos roben el bolso. No quiere decir que no sea posible que nos suceda lo segundo, sino que poner el foco en ello, obviando lo primero, es característico de una concepción social que favorece a quienes ya sabemos. En 2019 se produjeron, según esa estadística mezclada de la que hablábamos, menos de 15.000 *okupaciones*. El mismo año sucedieron más de 1.300.000 accidentes laborales, de los cuales 600.000 implicaron la imposibilidad de ir a trabajar en días sucesivos (la media de días de baja fue un mes) y casi 700 acabaron en muerte. De lo primero tenemos cumplida información. De lo segundo, no. Igual es por algo.

Como consecuencia de esto, para que este modelo que venimos describiendo funcione hay que recurrir a algo más que a los datos, porque siempre se podrían confrontar con otros datos y podría quedar destapado el interés por unos delitos y el camuflaje de otros. En suma, se podría contrarrestar con datos el discurso político-policial de clase.

Así, desde hace tres décadas, entra en escena la víctima. La víctima no como persona que ha sufrido (y que por ello merece una reparación, la comprensión e incluso el apoyo social, en la mayor parte de las ocasiones), sino como constructora de discurso, como ícono del espectáculo que presiona para que la dureza del código penal vaya siendo cada vez mayor. No hay víctima de delito que aparezca en los medios analizando el contexto social y pidiendo medidas de equilibrio económico. Puede que esto sea lo lógico: quien está dolido ante una agresión no suele hacerlo. Sin embargo, generar una corriente a favor de la penalización cada vez más extrema a partir del testimonio de las víctimas es una táctica rastrera. Rastrera, pero eficaz. Ante el sufrimiento de una persona de la cual se conoce la

historia (ya se encargan los medios de contarla, con los necesarios tintes tremendistas), ante el dolor relatado de forma cruda, ante la falta de explicación del origen del mal, la respuesta inmediata es la rabia, la petición de venganza, la sensación de desamparo, el clamor de un control absoluto. El modelo policial de justicia. Porque al final, todo conduce a la reivindicación policial: más personal, más medios, más posibilidades de actuación, más presupuesto.

Por el camino, como decíamos, ha quedado la vieja reivindicación del socialismo de que la mayor parte de los delitos debe tratarse desde el concepto de injusticia social y, por tanto, afrontarse como un fracaso del sistema. Ahora es el individuo, descontextualizado y libre absolutamente de tomar decisiones racionales quien debe cargar con la exclusiva responsabilidad de los desequilibrios. Visto así, la mano dura es el único camino.

Esta idea de justicia acaba construida con los siguientes miembros: lo más grave que le sucede a una sociedad son determinados delitos protagonizados por determinado grupo social (fundamentalmente, pobres y migrantes); los delitos solo los causan los *delincuentes*, categoría que excluye a quienes hacen un daño social igual de grande (véase empresas que despiden sin pudor, fábricas que destruyen el entorno, capitalistas y políticos que esquilman la riqueza e incluso policía que emplea la violencia); la víctima es el paradigma de construcción de discurso, no la comunidad o la sociedad; la respuesta a la inseguridad solo puede ser el refuerzo de la cultura de control y represión, articulado en mayor dotación policial y endurecimiento de los códigos penales.

Por tanto, para evitar que alguien salga herido por la famosa piedra del principio del capítulo, la solución es dotar a cada indi-

viduo de un policía detrás. O de su sustituto en forma de control tecnológico.

CAPÍTULO 5
EL BRAZO ARMADO DE LA LEY

Venimos insistiendo en que los cuerpos policiales son uno de los instrumentos que los distintos sistemas o Estados utilizan para su mantenimiento. Es una evidencia que este instrumento tiene diferencias respecto a la escuela, la judicatura o la propaganda de los medios de comunicación, por poner algún ejemplo.

Desde que en el mundo del pensamiento irrumpieran términos como *violencia simbólica* y en el contexto social fueran desapareciendo los grupos armados de diferentes opciones, el concepto de violencia se ha ido ampliando, dando cabida a fenómenos donde el ejercicio autoritario del poder resulta mucho más sutil.

Todo esto ha traído como consecuencia que podamos poner la lupa sobre abusos antes ocultos, trayéndolos a primer plano bajo el nombre genérico de violencia, concepto que en pleno siglo XXI tiene muy mala prensa en buena parte de las sociedades. Sin embargo, se corre el riesgo de equiparar el hecho de no dejar ir al baño en la escuela (que, sin duda, es violencia simbólica y abuso de poder en un contexto de reproducción del sistema) con la tortura o el asesinato. Y, claro, pues no es lo mismo.

La policía (junto al ejército) es el cuerpo que ejecuta la violencia legitimada por el sistema, la violencia que aspira a ser la única aceptada o aceptable (a pesar de que esto pocas veces se consigue). No hablamos solo de violencia simbólica, algo obvio en los cuerpos policiales (existe incluso un delito de desobediencia a la autoridad y nadie parece escandalizarse), sino la otra, la violencia de siempre, la que rompe huesos, saca ojos, abre cabezas o acaba en una tumba. La violencia contundente, la que necesita de esposas, de pistolas, escopetas, balas, teasers, bañeras y bolsas, por ejemplo.

Desde el principio de la creación de los cuerpos policiales se ha ejercido esa violencia con mayor o menor miramiento, si bien podemos desgranar algunos modelos de actuación que se han ido poniendo en marcha, a veces de manera sucesiva, otras de forma solapada.

Los primeros intentos de crear policías al servicio del Estado siguieron lo que habitualmente se denomina el modelo francés, ya que fue en ese país, durante la Revolución Francesa, en el que comenzó a diseñarse una estrategia policial de alcance nacional. Ese modelo tiene como base un fuerte centralismo, ya que el traspaso de la seguridad y el orden de manos militares a manos policiales se hace siguiendo los parámetros del ejército respecto a su fuerte jerarquización. A esa estructura general se añadió el control político de la policía, vinculando de forma intensa el mando policial y el de la administración, de forma que, a menudo, la policía actúa como un apéndice de los criterios políticos de manera explícita. Para ello, poco a poco fue extendiendo una red de confidentes con el objetivo de lograr la información necesaria para futuras actuaciones, a menudo orientadas al mantenimiento del orden social. En el caso de

España, la puesta en marcha de la primera policía de alcance nacional por parte de Fernando VII y la persecución de los elementos liberales durante la conocida como *década ominosa* o los años del pistolerismo en Barcelona en la década de 1920 son ejemplos de este modelo. La represión se realiza de manera brutal, pues los objetivos de eliminación de la delincuencia y de fidelidad a los mandos políticos están por encima de protocolos de actuación legales.

El rechazo que generó este modelo policial entre buena parte de la población, como examinamos en el primer capítulo, era muy extenso, por lo que el uso de la violencia comenzó a gestionarse desde otros modelos, sobre todo a partir de los siglos XX y XXI.

Ya en el primer tercio del siglo XX comienza a hablarse de la necesidad de que el ejercicio de la violencia policial se base en criterios de especialidad, lo que se conoce como *modelo profesional*. Esto influye en la creación de escuelas policiales y de procesos de selección encaminados a incorporar a las plantillas policiales individuos que reúnan las capacidades requeridas, que ahora irán más allá de la condición de matón profesional al servicio de un orden estatal. Las diferentes policías incluyen en sus programas de formación el conocimiento (aunque superficial) de la ley y la aplicación de métodos policiales, incluidos los relacionados con el ejercicio de una violencia que cada vez será más protocolizada, sin que eso signifique perder su carácter brutal.

En este modelo existe un intento de vincular el ejercicio policial con una profesión técnica, situada al margen de los deseos políticos, evitando su identificación mutua. Así, a principios del siglo XXI, en Gran Bretaña, después de las duras batallas del mundo del trabajo contra las medidas neoliberales, realizadas desde un modelo

de violencia policial al servicio de la política *thatcheriana* que todo el mundo reconocía, se trata de borrar la identificación del policía como esbirro de un sistema y sustituirlo por la de un profesional técnico que solo usa la violencia de manera aséptica, basando su aplicación en un análisis poco menos que científico del entorno. Un RoboCop con ordenador a bordo. Así, se afinan poco a poco las técnicas de gestión de la información, incorporando de hecho al fichero policial a toda la población, ahora vigilada por sistemas informáticos y de videovigilancia. Al mismo tiempo, se refinan los aparatos a disposición de la policía, sus armas antidisturbios y sus dotaciones de vehículos o tecnológicas.

De este modelo profesional, sin embargo, ha quedado más en la memoria la estrategia *tolerancia cero*, aplicada por el alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y su jefe de policía William Bratton, que estaba basada en la *teoría de las ventanas rotas* de George L. Kelling y James Q. Wilson, de 1982. Significa una intervención dura sobre comportamientos visibles que suponen una imagen de deterioro del orden, suponiendo que esa imagen deteriorada es caldo de cultivo de la delincuencia. Es decir, la policía, sencillamente, aplicaba un protocolo de violencia desmedida ante hechos poco peligrosos en realidad, pero que subjetivamente se interpretaban como una ruptura de la convivencia.

Este modelo profesional produjo una nueva percepción de la violencia policial. Se logró mitigar en parte la imagen de su ejercicio de manera aleatoria, pero no fue suficiente. La policía necesita, como todo organismo que ejerce el poder, de la legitimidad que le concede quien debe obedecer. En el momento en el que grupos sociales amplios cuestionan la aplicación de métodos violentos policiales, el

edificio se derrumba. La policía, que patrulla barrios en parejas, no puede mantenerse con la oposición de los vecinos de esos barrios. No puede vivir con la mirada de rechazo o con la hostilidad. Necesita, y así lo han entendido los gestores del aparato policial, de la que se ha conocido como *colaboración ciudadana*. Esta va más allá de llamar a una pareja de guardias en caso de conflicto. Significa aceptar que un grupo de personas armadas tenga potestad para intervenir en problemas sociales o personales. Significa, en el ideal policial, contar con la simpatía popular.

El modelo profesional no proporcionaba esa simpatía. Se percibía a la policía como burócratas armados que actuaban a menudo de manera desproporcionada y sin tener en cuenta las diferentes situaciones a las que se enfrentaban, por lo que se buscó otra estrategia que, sin anular lo logrado en el campo de la especialización, permitiera ese acercamiento entre los policías y la gente. A esta se le denominó *modelo comunitario*. Si bien ya había sido teorizado por Robert Peel, en 1829, cuando define a la Policía Metropolitana de Londres como un servicio público, es a partir de finales del siglo XX cuando se pone su estrategia en marcha. Se busca un perfil de actuación de apariencia dialogante, que incluye la presencia en los barrios y el conocimiento del vecindario, logrando un gran control informal de la sociedad. Esto corre paralelo a la aplicación del *populismo policial*: actuar sobre la delincuencia socialmente percibida como relevante. Lógicamente, se abre las puertas a que esa percepción sea dirigida por los grupos que tienen más poder de influencia, además de la propia policía. Así, los comerciantes de una zona pueden hacer más presión como colectivo que los parados, por lo que es más probable que se ponga el acento en el pequeño robo que en la

deslocalización empresarial. La violencia, en el ideal de este modelo, acaba disfrazada de amabilidad, y se ejerce en rincones apartados, contra población previamente señalada.

Son estas bases sobre las que se construye el empleo de la violencia policial en la mayor parte de las sociedades occidentales: la profesionalización aparentemente separada de criterios políticos y la cercanía a la población, buscando en ella los suficientes puntos de apoyo para que, llegado el caso de un uso explícito de las armas, se cuente con el apoyo mayoritario o, al menos, con la aquiescencia.

El uso de esa violencia está asociado al concepto de represión, legitimado como la necesidad de efectuar una vigilancia, un conjunto de sanciones y, llegado el caso, un despliegue de acciones contra aquellos hechos y personas que se definen como enemigos internos, enemigos del sistema. Por lo tanto, la represión no depende solamente de la categorización del delito, sino del momento en que se encuentra un sistema en un momento dado. Existe una selección represiva en función del análisis de las posibilidades de desestabilización que un conjunto de actos o un movimiento concreto pueda producir.

En momentos de crisis social, los diferentes grupos de personas que puedan cuestionar el propio sistema serán reprimidos en función de su alcance o de las posibilidades que tengan de provocar rupturas. Así, podemos ver cómo durante el periodo denominado *la Transición*, los movimientos callejeros de ultraderecha, que a pesar de su implantación y actividades a menudo letales, no suponían un grave riesgo para el proceso e incluso eran un recurso para disuadir a otras personas de participar en actos políticos, fueron reprimidos con menos intensidad que las manifestaciones obreras o de las fuer-

zas que abogaban por la ruptura, usando para ello actuaciones violentas sin reparos. En 1977, 3 de cada 4 manifestaciones son disueltas con violencia, mientras las actuaciones del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, que incluso colaboró en la represión de algunas de esas manifestaciones, salían indemnes en su mayoría.

Lo mismo sucede cuando se señala a determinados colectivos implicados en protestas sociales, sobre los cuales puede recaer la violencia tras esa campaña de señalamiento y, en otro momento concreto, ser tratados con otras medidas.

Una vez que existe un grupo social o unas prácticas concretas ante las que se justifica el uso de la violencia, se pone en marcha la maquinaria que se mueve en la fina frontera que hay entre la delincuencia estatal y la aplicación de la ley. Pongamos ejemplos para ver esto más claro.

Es algo bastante evidente que en los últimos 35 años se ha vivido una derechización social sin precedentes, al abrigo del triunfo de las tesis neoliberales y de su hegemonía en el panorama informativo. Fruto de esto, prácticas sociales que hace una generación estaban normalizadas e incluso gozaban de consideración son señaladas como delincuencia y agresiones a una libertad que solo funciona en una dirección. Así, cada huelga general (de las pocas que se van haciendo ya), el hecho de la formación de piquetes ha pasado de entenderse dentro de la lógica de enfrentamiento con el esquirolaje y la patronal a ser vendido como un atentado inadmisible a la libertad de decidir trabajar en un día de huelga.

Este señalamiento básico obedece, lógicamente, al interés de la patronal, pero proporciona a la policía la ventaja de presionar para que los días de huelga se transformen en momentos en los que

la intensidad de la lucha social sea cada vez menor, por amedrentamiento o incluso por convicción de parte de los trabajadores. En todo caso, la propaganda se complementa con la vinculación de las actividades de los piquetes a la violencia (en algún exceso verbal, al terrorismo). Y la violencia es el límite ético del siglo XXI, el anatema, lo inadmisible.

Así, las últimas huelgas han tenido como resultado un hostigamiento de alta intensidad por parte de las fuerzas policiales. Incluso teniendo en cuenta que, en comparación con las huelgas de los años 80 del siglo XX, por ejemplo, han sido menos conflictivas. Fruto de esa represión, en las tres huelgas de 2010 y 2012, CC. OO. cifra en trescientos los miembros de su organización y de UGT con causas abiertas. Ya no se trata de proteger los grandes almacenes para que los esquiroles puedan entrar en el simbólico espacio dominado por la patronal. Ahora se ataca al movimiento sindical en cuanto se sale de las mesas de negociación y los desayunos con los empresarios.

Algunos casos muestran lo que queremos exponer: una vez los piquetes han sido denostados e identificados con el gran enemigo, expresión de la violencia contra la libertad, la policía desata su estrategia represiva con la aprobación de buena parte de la población. Algunas de esas acciones represivas derivan en la acusación de graves delitos, como los casos de *los tres de Vendrell*, con peticiones de seis años de prisión, o *los ocho de Airbus*, encausados tras sufrir cargas policiales que incluyeron disparos y a los que se pidió penas de hasta ocho años y medio.

No es importante si luego el juez de turno absuelve o condena al sujeto señalado, sino la manera de actuar en ese delgado límite entre la aplicación de una ley que de por sí ya es bastante represiva

y la inclusión de elementos que rozan la delincuencia. La exposición de presuntas pruebas que ofrecen severas dudas, la precisa selección de acusados concretos en un tumulto (sin detención en el momento) y su reconocimiento mucho tiempo después en ruedas de reconocimiento o la vinculación destacada de los procesados a estructuras sindicales hacen sospechar que las acciones represivas tienen un carácter que va más allá de la protección de los esquiroles el día de la huelga, convirtiéndose en una advertencia contra la militancia, bastante disminuida ya, en ámbitos laborales. Que esto no haya generado apenas reacción fuera de los entornos militantes muestra hasta qué punto la legitimidad policial ha calado hondo.

La misma estrategia puede seguirse con personas que pertenezcan a cualquier grupo que sea señalado previamente.

Convendría quizá hacer una distinción entre aquellas prácticas que dañan a una comunidad de manera efectiva y aquellas otras que, siendo delito, se perciben como riesgo a partir de la propaganda estatal y policial. Si ponemos por caso el problema laboral, resultaría muy evidente que quienes impiden el trabajo no son los huelguistas con un día de reivindicaciones, sino una patronal que logra desde hace décadas que los salarios se estanquen y los despidos se aceleren; o un sistema económico que, logrando producir más que nunca, ha sido incapaz de repartir el trabajo y los beneficios (no se entienda incapaz como fruto de una voluntad positiva y unas condiciones adversas, claro), un sistema que se encarna en personas concretas, desde los ministros de economía hasta el dueño del bar de enfrente. Hecho esto, sin embargo, nos costaría mucho reivindicar que la policía entre con botes de humo y a porrazo limpio en la siguiente reunión de la CEOE. O que detenga por la noche a empresarios que

incumplen regularmente los horarios laborales imponiendo jornadas extenuantes entrando en sus casas a gritos y derribando las puertas con arietes. Y, por supuesto, nunca se nos pasaría por la imaginación que los diferentes cuerpos policiales deberían irrumpir en los foros donde se dirimen las legislaciones laborales y arrastrar de los pelos, contundentemente, a quienes firman convenios vergonzosos, sean presuntos sindicalistas o miembros de comisiones oficiales. Si todo esto suena desgraciadamente cómico podría ser porque la disidencia social es realmente el objetivo, no el daño a lo colectivo.

Abríamos el capítulo apelando a la distinción entre la violencia que se consideró como tal hasta finales del siglo XX y la extensión de su significado en los últimos veinticinco años, hasta llegar a aplicarla a realidades variopintas. Sin ánimo de polemizar por aspectos filológicos, sin intención de minimizar el daño que puedan suponer otro tipo de situaciones, defendemos que la violencia policial se concreta en violencia simbólica, por supuesto, pero también en violencia física, que puede llegar a una残酷inalcanzable para otras agresiones.

El uso de la tortura, obviamente, no ha estado restringido a la policía. Ha habido otros grupos humanos que lo han practicado pero, en el caso de las sociedades contemporáneas, el peso mayoritario de su práctica ha caído en los cuerpos policiales y militares, especialmente en los primeros.

Las detenciones y encierros en lugares a los que no acceden más que los funcionarios policiales durante días (dependiendo de la legislación de cada país) y el argumento de la urgencia de obtener información proporcionan un marco de condiciones que facilita el uso de la violencia extrema, que es más o menos la definición de tortura.

Hay cientos de relatos de detenidos sobre el asunto. Algunos hablan solamente de presiones psicológicas, como la aparición de policías encapuchados que lanzan amenazas. Quien no haya estado nunca detenido puede pensar por un momento en lo que significa que, en condiciones de aislamiento del mundo, aparezcan uno o varios individuos con el rostro oculto y las armas a la vista. No hay que ser muy sagaz para intuir que las intenciones de quien camufla su identidad en ese momento no son amistosas, precisamente. No hay que ser muy agudo para entender el miedo que puede provocar.

En otros casos, otros cientos de casos, se habla del paso a la acción. Desde el golpe seco, rudo y tradicional hasta la violación y los diferentes procedimientos de dolor inhumano. No nos detendremos demasiado en el catálogo de crueidades, que incluyen ahogamientos, calambres, rotura de huesos y otras lidezas al socaire de la creatividad policial. Sí señalaremos que no hay otra ocupación en la que este tipo de actos se produzca con tanta frecuencia y hayan sido tan denunciados.

En el caso español, en 2017, fecha muy reciente y ya sin la actividad de una organización como ETA, que era esgrimida por los cuerpos policiales y judiciales como una coartada de denuncias falsas, se presentaron más de mil denuncias por tortura, malos tratos o tratos inhumanos, según la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Más de tres al día, como media. Hay que tener en cuenta que es más que probable que estas cifras oculten unas dimensiones mucho mayores. ¿Qué chaval denunciaría los cuatro bofetones que recibe en la calle por haber sido identificado consumiendo droga? ¿Qué prostituta denunciaría a un policía, sabiendo que puede encontrarla en la calle todos los días? ¿Qué migrante rela-

taría actos humillantes? ¿Quién, que no tenga contactos, abogados o que considere lo sufrido como una afrenta inaceptable, se atrevería a llevar a una comisaría o a un juzgado una denuncia contra sus compañeros (los de la comisaría) o sus colaboradores (los del juzgado)?

Y, además, ¿para qué? Una institución revolucionaria subversiva como el Tribunal de Estrasburgo condena en 2021 al Estado a indemnizar a tres detenidos por torturas. Es la octava vez que el mismo tribunal le dice al Estado que ponga más cuidado en estas cosas, que al final todo se sabe. Esta vez habían sido encerrados por un caso relacionado con la izquierda abertzale, por lo que, siguiendo el procedimiento habitual, sus denuncias se consideraban estrategia de ETA, algo imposible, despreciable. Curiosamente, el proceso denunciado se parecía mucho al que han expuesto libros como el de Iñaki Rekarte, copiado casi literalmente en la exitosa novela *Patria* y otros testimonios siguen el mismo esquema e incluso los mismos hechos. Alguien parece tener un manual, sí. O los que denuncian o los denunciados.

En el año 2017, el Gobierno Vasco encarga un informe para analizar el alcance de las situaciones de tortura. Le salen unas cifras que solo alarman a la policía para desmentirlas, no para investigarlas, claro. En cincuenta años, más de 4.000 casos de tortura. 20 condenas. La desproporción es llamativa, pero no trasciende demasiado. La imagen policial queda impoluta. Una manzana no pudre el cesto, dicen siempre. Sobre todo si esa manzana es de las nuestras, de las que tienen que bajar al barro a mancharse, para salvaguardar la paz del Estado, la calma social. Por eso el gobierno central llama a la inconstitucionalidad cuando se presentan leyes de reparación ante torturas en País Vasco o Navarra. Cómo va a ser constitucio-

nal indemnizar a quienes fueron electrocutados en un calabozo, a quienes fueron golpeados durante cinco días, a quienes se les puso una bolsa en la cabeza para que se ahogasen, a quienes se sumergió en agua hasta prácticamente la asfixia. Como decía aquel grupo de música: «Todos sabemos que aquí no se tortura. Vivo en un pueblo tranquilo...».

No se conoce ninguna otra ocupación humana en la que la sospecha de practicar la violencia contra personas indefensas esté tan extendida. No se conoce ninguna actividad en la que esa sospecha se haya conseguido justificar, no solo por la amenaza de poder sufrirla cualquiera, sino por aclamación popular. Contra el enemigo todo vale. Y el enemigo es el todo.

El grado de aceptación de estas prácticas ha ido incrementándose en los últimos años. A finales de la dictadura y durante los años de la década de 1980, en momentos en los que la violencia política tenía un alcance muchísimo más extendido que en la actualidad, la idea de que las fuerzas de seguridad practicaban la tortura estaba bastante extendida entre todo el arco de la izquierda y su rechazo, lógicamente, también. En los últimos años, ese mismo arco, salvo excepciones puntuales, ha dejado de considerar la posibilidad de señalar casos flagrantes de abusos policiales. Cuando lo ha hecho, se ha encontrado con denuncias por difamación, todo sea dicho. Incluso con oleadas de indignación en las redes sociales (sean estas oleadas reales o dirigidas), que acusan al acusador, que lanzan el anatema de terrorista a quien reclama transparencia en los calabozos, que deja caer, si no lo escupe descaradamente, que tras cada sospecha de un maltrato policial hay un odio al país, un presunto terrorista y un mentiroso compulsivo. Así, el problema se ha convertido en doble:

la ausencia de movimientos que hagan presión para evitar posibles casos de tortura y, aun peor, la justificación de cualquier actuación policial en aras de la estabilidad, lo razonable y la paz social, que quedan por encima de la justicia. Dicho de otra forma, la policía como ser inmaculado.

Si los casos de maltrato en comisaría o calabozos pueden ser un tema muy difícil de determinar, por tratarse de asuntos sin testigos dispuestos a declarar a favor del denunciante (sobre el papel de los médicos forenses se podría escribir otro libro), la violencia más visible, la ejercida en la calle, es otro asunto.

Un mínimo interés por encontrar violencia documentada puede llevar a cualquiera a ver miles de *clips* de vídeo en Internet en los que los cuerpos policiales reprimen manifestaciones. Golpes de porra, tanquetas con agua, gases lacrimógenos, disparos de pelotas de goma o de balas... Todo un despliegue de guerra contra un enemigo variado: gente que bloquea un desalojo, gente que defiende su puesto de trabajo, gente que desprecia el fascismo, gente que pide un referéndum, gente que defiende la supervivencia de la agricultura, gente que protesta contra esto o aquello. Enemigos todos.

La Unidad de Intervención Policial, más conocida como *anti-disturbios* (que es un curioso nombre, todo sea dicho), es la protagonista estrella de estas imágenes. Una serie de tipos enormes, con casco, traje armadura, escudos y armas golpean siguiendo la voz de mando todo lo que se ponga por delante. Pero antes de esto ha comenzado su labor, preparando el campo de la violencia para su aceptación popular. A menudo, esto se ha ido haciendo a largo plazo. Medios de comunicación que asumen las tesis policiales incluyen de manera sistemática en sus titulares o artículos de opinión

la designación como violentos o peligrosos de determinados movimientos. Reportajes sensacionalistas, avalados por los gabinetes de prensa policiales, desvelan cada poco tiempo los entresijos de los *okupas*, los *anarquistas internacionales*, los *antifascistas*.

En otros casos, se refuerza la imagen antes de un acto concreto. Para ello, se *filtran* informaciones. Filtrar aquí no tiene ningún significado similar a que se haya escapado sin querer algún dato. Se trata de información transparente dada a los medios, avisando de que en alguna manifestación se esperan *altercados* o *presencia de elementos violentos* o algún titular similar. Como se esperan altercados, también se espera *fuerte presencia policial*, lo que viene a equivaler a un: «si te acercas por allí, puedes ser golpeado, detenido o algo peor. Tú verás». El gremio de anónimos comentaristas de noticias de Internet de la extrema derecha firma luego el epílogo, constatando, con lógica meridiana, que quien haya cobrado es porque andaba por ahí, y eso que habían avisado. Estos rojos nunca aprenden.

Una carga policial es algo desmedido, violento en extremo, que permite a muchos activistas documentar la violencia del sistema. Incluso puede convertirse en un momento de indignación y de apoyo a una causa cuando las imágenes de los golpes se difunden. Un vídeo de personas sentadas en una plaza a las que la policía golpea, arrastra de los pelos e insulta no es buena prensa. El guantazo de un antidisturbios a una chica que se retire más lentamente de lo que aquel considera no casa con la idea de que la policía está para protegernos. El ojo perdido de una mujer que se manifiesta tranquilamente remite a tiempos oscuros, en los que no teníamos esta policía democrática, aséptica y profesional. Una cabeza abierta, manando sangre, ante el portal de una familia con cuatro hijos que

va a ser mandada a la calle por un banco pone en entredicho lo de defender la justicia. Es inevitable en la lógica del poder. Existe un cuerpo, ese de los antidisturbios, creado explícitamente para este tipo de actos (¿qué cabeza tendrá aquel que por dinero sacude a todo bicho viviente cuando recibe la orden?). Pero el poder del siglo XXI debe buscar, igual que en otros campos, el ejercicio a partir del consentimiento, la aceptación más que la imposición, la prevención y el control antes que el enfrentamiento. En definitiva, la creación de un espacio de previolencia que evite esa difusión constante de policías haciendo heridas a personas.

Las maneras de lograr esto se han ido refinando. Son una novedad relativa. Incluso han sido aceptadas como parte de la rutina militante por una generación que las ha vivido desde que sale a las calles.

La identificación selectiva de personas que acuden a una manifestación es una primera señal de amenaza. Tenemos tus datos y podemos responsabilizarte de lo que ocurra aquí. Tenemos tus datos y sabemos que estás en todos los fregados. Tenemos tus datos y te vigilamos, ojito. Da igual que no hayas hecho nada, tenemos tus datos como justicia preventiva, chavala.

Negarse a dar los datos, en el caso de identificación individual, puede comportar la inmovilización temporal. En realidad, casi nadie se niega ya a dar los datos a la policía, toda vez que se ha convertido en obligatorio el control. Otra cosa es que suceda en grupo.

Una vez dados los carnés, la llegada de alguna sanción, alguna multa, es cuestión de lotería. Puede que sí, o puede que no. Pero las papeletas ya las han repartido, con la emoción que supone participar en el sorteo. Si quieres volver a jugar, anuncian los hechos, te esperamos.

Impedir que determinados grupos se acerquen a una manifestación es la táctica estrella de los últimos años. Esto, que se denomina *encapsulado*, consiste en hacer un cerco en torno a un grupo determinado, impidiéndole moverse. A veces, este cerco se mantiene sin condiciones durante un tiempo arbitrario (que en algunas ocasiones, en Chile, ha llegado a ser de tres horas). Si alguien intenta romperlo, es repelido. Si lo intenta el grupo, se produce la carga policial. En otros casos, además del tiempo, la policía pone una condición para levantar el cerco. A menudo es entregar el carné de identidad. Mientras tanto, la manifestación transcurre. Por supuesto, los manifestantes no rompen el cerco. Algunos incluso lo viven con alivio, porque la policía está protegiendo el derecho a manifestarse de manera pacífica. Otros, que querrían intervenir, no lo hacen por miedo, por ser pocos, por no romper la unidad.

El cerco puede ser un bloqueo sin más, una táctica de desesperación o un acoso. En el primer caso, se trata de separar a un grupo de una manifestación. Esto se lleva haciendo en España al menos 30 años. Cortar una manifestación y retener el paso de parte de la misma ya se observó, por ejemplo, en manifestaciones estudiantiles de la década de 1990. Sin embargo, la novedad está en las otras dos opciones: cortar el paso de un grupo suponía que ese grupo podía darse la vuelta y, bien buscar otro camino, bien volverse a casa, bien dirigirse hacia otro lugar sin impedimento. El encapsulado no permite eso. El encierro es inmovilización, que saca de quicio, que estresa, que provoca la reacción y que, en último caso, genera un enfrentamiento que justifica la carga policial. El cerco se puede estrechar hasta prácticamente mantener contacto físico con los escudos policiales. Imagina que es tu primera manifestación. O tu segunda

o tercera. Decenas de antidisturbios te rodean y cierran un círculo, impasibles, armados, en disposición de golpearte, sin salida posible. Te mantienen así, da igual, media hora, una hora, dos. Te va a quedar un bonito recuerdo de lo que significa ir a la calle a protestar.

A pesar de todo esto, las cargas policiales se repiten. Las protestas se desbordan o las delegaciones de Gobierno deciden que se han desbordado. Los mandos policiales organizan su guerrilla contra la gente y reparten estopa. En general, porrazos a la altura de la parte baja del cuerpo. A todo lo que se mueva. En general, el pueblo soberano corre que da gusto y la cosa no pasa a mayores. A veces no. A veces hay que emplearse a tope. No hay problema. Se disparan bolas, se usan los caballos (cada vez menos, que la estampa parece sacada de *Cuéntame*), se utilizan, cada vez más, los vehículos para bloquear, hacer de parapeto y vigilar desde el aire, se usan drones para hacer la estrategia más certera. Cuando un policía se tuerce una muñeca por vehemencia, se denuncia al que cobra. Cuando un policía se tuerce un tobillo por correr embutido en una armadura detrás de alguien, se determina herida por agresión. Cuando una persona es herida por un policía, cuando cientos de personas acaban en el hospital, cuando hay ojos sacados o huesos rotos entre los manifestantes, la delegación del Gobierno habla de respuesta proporcionada. Como mucho, hablan de investigar. No sucede nada. La policía ha cumplido con su parte y los políticos y los médicos con la suya. Todo en orden.

Cuando acaba la protesta, en los últimos tiempos, la labor policial continúa. Si ha habido enfrentamientos de algún tipo, se recogen restos. Por supuesto, ha habido grabaciones y fotografías. Se archivan. Una piedra, un palo presuntamente utilizado, guantes, restos

de ropa. Se archivan. No todo puede analizarse, buscar el ADN para crear una base de manifestantes. La pobre policía siempre anda escasa de recursos. Pero queda ahí, quedan pistas por si alguna vez hay que atar cabos, descubrir tramas, trazar senderos que conducen al mal.

Incluso, si hace falta, para fabricar un enemigo.

Capítulo 6
FABRICAR AL ENEMIGO

Existe una larga tradición de oscuros casos en los que la disidencia ha sido encausada, juzgada y condenada con pruebas dudosas. De hecho, el origen del primero de mayo, el día de reivindicación obrera por excelencia, está vinculado a un montaje policial y judicial. La historia es bien conocida: la explosión de un artefacto dirigido a la policía durante una manifestación en 1886 produjo la detención de centenares de obreros y, finalmente, la condena a muerte de cinco de ellos, cuatro de los cuales fueron asesinados por el Estado, mientras uno de ellos se suicidó en su celda. Las pruebas sobre la responsabilidad de estos anarquistas eran mínimas. A estas alturas, nadie sostiene su culpabilidad.

Por supuesto, no es el primer montaje policial de la historia. El movimiento obrero tiene una amplia experiencia en cuanto a este tipo de hechos.

Entre ellos, figuran algunos tan espectaculares como el de la presunta organización La Mano Negra, cuyos estatutos descubrió providencialmente la Guardia Civil en 1882. Ningún historiador con un mínimo de bagaje considera la versión policial cierta: o bien se duda

de la autenticidad de los documentos o bien se entiende que no se encontraron casualmente en ese momento. De cualquier forma, sirvieron para desatar una campaña de represión contra los anarquistas e internacionalistas andaluces, con miles de detenidos. A nadie se le debió ocurrir que si hubiera existido una organización como la tal Mano Negra formada por miles de jornaleros ansiosos por quemar cosechas y ejecutar terratenientes, sus estragos hubieran sido notables.

En 1896 se produce un atentado con bomba contra una procesión del Corpus en Barcelona. Mueren 12 personas. Comienza un montaje policial que supone centenares de detenidos, hacinados en el castillo de Montjuic. Lógicamente, era imposible que ese número de personas hubiera participado de alguna manera en la preparación común de un atentado. En el castillo se practican torturas de toda índole. En el juicio se piden 28 penas de muerte y 57 condenas de cadena perpetua. El abogado de uno de los acusados se suicida, se entiende que por considerar que su defendido es inocente y tener que participar en esa farsa. El escándalo es mayúsculo, «hasta el punto de erosionar el prestigio de la Guardia Civil como ningún otro episodio de la historia», afirma afligido el capitán de la Benemérita Miguel López, metido a historiador. De los centenares de detenidos, en el juicio ya no se sabe quiénes son juzgados por el terrible atentado, por ser anarquistas peligrosos o, sencillamente, por ser anarquistas.

En 1927 son ejecutados Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Historia convertida en ejemplo de la manipulación policial y judicial, resume las características de un buen montaje: dos protagonistas estigmatizados por anarquistas y por extranjeros; una acusación extraña y falta de pruebas objetivas; una campaña intensa de la

prensa conservadora para agitar a la opinión pública en su contra; un juicio que resulta más pantomima de lo habitual; una condena final brutal.

Durante el franquismo se dan montajes policiales tan groseros y continuados que el propio régimen es un montaje policial en sí mismo. Las detenciones arbitrarias y las medidas que acarrea estar en el punto de mira de la policía hacen que no se necesite de grandes planes para quitar de la circulación a quienes se elija.

En 1978, la CNT está en un momento intenso. Su crecimiento tras la muerte de Franco ha sido espectacular. Su implantación en centros de trabajo no es precisamente hegemónica, pero sí relevante. Es la única organización sindical con presencia en todo el territorio que se opone a los conocidos como Pactos de la Moncloa, que vienen a sellar la paz social para abrir definitivamente la vía al desarrollo capitalista de la sociedad postdictatorial. Se convoca una manifestación contra esos pactos. No es masiva, pero agrupa varios miles de personas. Al acabar, un grupo de afiliados al sindicato, entre los que se encuentra un animoso infiltrado policial, se dirige a una conocida sala de fiestas y lanza unos cócteles molotov. Mueren cuatro trabajadores, también afiliados a la CNT, y el edificio se derrumba, ante la sorpresa de propios y extraños. Las detenciones en el entorno libertario hacen mella y la prensa se lanza a la yugular de la CNT. Es el conocido como Caso Scala.

En el año 2014, lejos de las agitaciones del tardofranquismo y disuelta ETA, el director general de la Policía declara que el terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país. Nadie se había sentido alarmado por ese terrorismo hasta el momento, pero el hombre lo ve claro, lo transmite a los medios de comunicación y estos

obedecen y lo cuentan. Pocos meses después, se producen tres operaciones de nombre misterioso: *Pandora*, que abre la presunta caja cerrada de los peligrosos anarquistas; *Piñata*, que agita el avispero de los terroristas para que caigan como caramelos en cumpleaños infantil y *Ice*, vaya usted a saber por qué. Algun juez que más tarde será reputado como sensato y progresista acusa a los detenidos en la primera operación de pertenecer a una organización terrorista y de disponer de explosivos. Un par de años más tarde, de aquellos titulares y aquellas prisiones preventivas no queda ninguna condena. Una organización terrorista que no existía sino en la mente policial, según la jueza que archiva el asunto.

Podríamos citar decenas de casos que se podrían considerar montajes. Incluso sería interesante que alguien escribiera la historia de estos montajes policiales, algo que no se ha hecho aún. Sin embargo, el propósito de este libro es otro y para él nos resulta más útil caracterizar lo que entendemos por montaje.

Sería un montaje la creación de una falsa acusación con pruebas débiles o intencionadamente falsas, que tendría como objetivo generar un proceso judicial que implique a una persona o un grupo, difundiendo tales acusaciones como verdades indiscutibles.

Para ello, el papel de las posibles pruebas y la creación de un relato más o menos coherente son importantes, aunque sea más relevante la difusión de ese relato, al amparo de lo indiscutibles que resultan para los medios las fuentes policiales, como ya hemos desarrollado antes.

A veces, el relato se crea a partir de indicios que no resisten el más mínimo análisis: los afectados pasaban por allí, formaban parte de alguna red de contactos más o menos formal que pudiera estar conec-

tada en el imaginario popular con el delito o eran individuos de vida sospechosa. En otros casos se construye una trama a partir de objetos encontrados que se sacan de contexto, como libros, pasquines o materiales diversos (desde petardos hasta sustancias sospechosas). Incluso se incluyen testimonios aportados por expertos en *subversión internacional*, que desvelan precisos planes de contubernio internacional a partir de la presencia de personas extranjeras en suelo patrio (aquellos de «red perfectamente organizada con conexiones internacionales»).

Que a lo largo de la historia se han dado montajes policiales es algo que no discute ningún historiador. Que las operaciones contra determinados movimientos sociales actuales sean montajes o no es algo que debe dilucidar el lector. Lo que sí es un hecho es que varias de esas deslumbrantes operaciones policiales se han saldado con la más absoluta ignorancia por parte de los jueces. A no ser que entre los magistrados haya también una siniestra red subversiva encargada de absolver a los sediciosos, pareciera más bien que tales tramas revolucionarias son débiles o inexistentes. O las investigaciones son más bien chapuceras, en el caso de que no haya intención policial de generar un proceso judicial artificioso a sabiendas, o realmente estamos ante lo que se podría llamar un montaje.

También podría alguien pensar que los posibles montajes policiales relacionados con el anarquismo no son tales, dada la conocidísima tendencia de estos individuos a subvertir por todos los medios a su disposición el orden vigente. Ante estos tipos, una investigación sería siempre daría con indicios de delincuencia, por supuesto, aunque luego los jueces desestimasen los procesos, dado lo escurridizos que resultan estos ácratas. En definitiva, que cuando el río suena, agua lleva.

Pero fíjense que todo un presidente del gobierno, allá por 2020, fecha cercana, explica el relevo de mandos de la Policía Nacional como algo necesario para desarticular un aparato dedicado al montaje y a la intoxicación sobre el nacionalismo y los diversos enemigos (personas o instituciones) del gobierno anterior. Dicho de otra forma, ese presidente del gobierno, poco dado a revoluciones como es propio de su cargo, pone sobre la mesa que hay una trama organizada de policías al servicio de un gobierno que fabrican o distorsionan pruebas para generar procesos judiciales. Este prohombre llamó al grupo *policía patriótica*. Se dedicaban, según él, a lo que vienen siendo montajes en toda regla, vaya.

Otro vicepresidente del gobierno, este sí con ínfulas revolucionarias y prácticas menos contundentes, pareció original al acuñar la expresión *cloacas del Estado* para señalar a una estructura policial dedicada, al parecer, a perseguir a su formación política mediante la difusión de presuntos delitos a la prensa y a los juzgados que luego resultaban ser poco menos que cuentos malintencionados. O lo que es lo mismo, montajes.

Cosas de izquierdistas, dirán algunos. Obviando la hipérbole de llamar *izquierdista* a un presidente del gobierno socialdemócrata, sorprendamos a los escépticos. En el año 2011, un miembro del partido conservador español más grande, antiguo ministro de Defensa y presidente del Congreso, nada más y nada menos, acusó a una unidad policial de crear un montaje político contra su formación. Según él, estaba dirigido por el ministro de Interior, del partido contrario. No es relevante si el caso se saldó o no con condena o si estas declaraciones eran más bien un intento de morir matando, sino que un señor de bien, democrática, cristiano, liberal

y conservador considere posible que la policía, siguiendo órdenes políticas, fabrique pruebas para incriminar a organizaciones o personas. Parece haber un acuerdo sobre que la posibilidad de existencia de eso que se ha denominado *montaje policial* no es solo cosa de radicales, extremistas perfectamente organizados y otros elementos delincuenciales.

Sin embargo, discriminar si algo obedece a pruebas más bien artificiales es más complejo en el caso de condenas efectivas, dado el asombroso prestigio que tienen aún las sentencias. Dada la discriminación legislativa (entendamos discriminación como diferencia a favor de alguien) de que la palabra de un policía vale más que la de cualquiera en un juicio y las dificultades de probar hechos que suceden a toda velocidad en la calle, como pudiera ser una presunta agresión en una manifestación, acumular condenas por parte de un movimiento social es algo relativamente sencillo. Basta con el señalamiento y la denuncia por parte de los fornidos antidisturbios para que se pueda considerar la existencia de una agresión. Con recurrir a la estadística una vez aplicadas las sanciones, ya tendríamos un movimiento o una persona violenta.

Asimismo, cuando ciertos movimientos sociales o personas han sido señalados desde los cuerpos policiales durante un tiempo, atribuirles una organización dedicada al crimen es más sencillo. Por ejemplo, si se produjera un altercado entre unos policías y unos fontaneros albacetéños en un bar a las dos de la madrugada, en el que estos últimos golpeasen a alguno de los policías produciéndole heridas, sería complicado acusarlos de formar una banda, de haber producido una bronca como consecuencia de la tradicional aversión de la fontanería a los cuerpos policiales o de formar parte de una

campaña sistemática *fontaneril* de acoso a los guardias. En el caso de que ese altercado se produjera entre jóvenes con militancia política y los mismos policías, en las mismas circunstancias, a pesar de lo difícil de demostrar la existencia de una cierta premeditación o de un plan para golpear a todo policía que estuviera en un bar a esas horas, la labor es más sencilla. Simplemente, cuando se ha creado el enemigo es sencillo dotarlo de todos los atributos de la maldad, incluido el de dar una paliza sin motivo a unos agentes que no están de servicio.

Sucedería algo similar si las personas objeto de una detención fuesen menores migrantes, que ya han ido siendo despersonalizados como MENAS o un grupo de chavalada de origen latinoamericano, conectados en el imaginario popular (tras un enorme esfuerzo de los gabinetes de comunicación policiales) con bandas de peligrosos criminales o activistas de cualquier lucha social.

Fabricar al enemigo en estas situaciones no implica ni siquiera un *montaje policial* al estilo clásico. Solo sería necesario ir deslizando notas de prensa en las que se destaque que los protagonistas de determinados delitos, repetidos y percibidos como peligrosos, pertenecen a un determinado colectivo.

Imaginemos que durante meses se anunciase en la prensa de todo tipo, de forma casi diaria, que los empresarios y banqueros maltratan a sus trabajadores. Un día, aparece una noticia de una familia desahuciada que llora frente a la pantalla acusando al banco X de haberla echado de forma inmisericorde y concretando su acusación en el director de la sucursal. Otro día, se difunden vídeos de despidos por embarazo, de amenazas por no querer hacer horas extra, de remuneraciones en negro para ahorrar seguros sociales. «De cada diez empresarios, cinco son corruptos y otros cinco acosadores», dicen las

redes sociales. Otro día más, la prensa señala en titulares a cinco columnas: «El truco de los empresarios: diez contratos anuales». En la entradilla: «los empresarios españoles, coordinados por la organización CEOE, diseñan una oscura trama financiera para evitar la firma de contratos fijos». La policía se queja de que tiene las manos atadas, ya que los jueces los sueltan al día siguiente de ser detenidos.

Vale, esto es complicado que suceda, ya que el empresariado español es modélico en su comportamiento y la policía, a pesar de perseguir encarnadamente este tipo de delitos laborales, en coordinación con centenares de inspectores laborales que visitan regularmente por sorpresa fábricas y grandes empresas de todo tipo, no ha logrado identificar apenas hechos similares.

Pero si sucediese así y el goteo acusatorio se produjera, la visión del pobre empresariado español, en lugar de la de un grupo de emprendedores que crea puestos de trabajo y que se confunde con el tendero del barrio, sería la de un grupo de enriquecidos individuos a través de la apropiación de la riqueza y de la presión a los trabajadores. Un grupo con tendencia a delinquir, al que se solicitarían penas mayores por delitos de todo tipo, la creación de unidades policiales especializadas, la vigilancia extrema, la anulación de todo tipo de subvenciones a quien intentase ayudarlos. Incluso es posible que decenas de cómicos se burlasen sin piedad del empresariado, con chistes de dudoso gusto, que provocarían polémicas sobre los límites del humor y que al tiempo reforzarían la imagen, por ejemplo, del empresario vividor, o acosador, o explotador o vaya usted a saber.

Posiblemente este sea un desafortunado ejemplo, pero sirve para que nos hagamos una idea de las posibilidades que tiene la selección de información en cuanto a la caracterización de un movi-

miento social o de una persona concreta. Más aún cuando ese movimiento no tuviera acceso a la réplica en iguales condiciones, pues no poseyera medios de comunicación del mismo alcance, no fuera escuchado por los que sí existen o no tuviera expertos en comunicación que dotasen a los mensajes del necesario envoltorio para transmitirse en los códigos efectivos del sistema.

Imaginemos otra objeción razonable que suele usarse en este tipo de casos. Se podría admitir la existencia de errores de procedimiento, e incluso que, en algunos casos, se tratase de investigaciones que tienen el efecto de desestimigar o acusar a los implicados sin pruebas suficientemente contundentes. Pero podría deberse a la acción de algunos efectivos aislados poco eficaces o con intenciones inicuas de verdad, pero al fin y al cabo unas manzanas podridas, que las hay en toda organización y que se depuran sistemáticamente.

Admitamos que saber a ciencia cierta si las diferentes operaciones que han resultado un fiasco y que han aparentado las trazas de montaje son fruto de un esfuerzo y diseño colectivo es imposible. Admitamos también que, en aras del orden, la justicia y la moralidad que se le supone a quien dice mantener el sistema contra el mal, sería razonable que tras cada fracaso y mancha de la reputación de alguna persona u organización, hubiera una rueda de prensa para admitir los errores y limpiar su imagen pública (la de los afectados por las acusaciones, claro), una rueda de prensa con tanta contundencia e impacto como la que hubiera dado Pablo a la investigación. No conocemos ninguna. Pudiera tratarse del tradicional e ibérico corporativismo, pero es peculiar que los responsables policiales no corrijan el trabajo de sus manzanas podridas, ahora que hasta la Iglesia aparenta castigar a sus pederastas, por ejemplo.

Y, sin pretensión de aburrir al lector con una trama que ya ha dado para varios libros de investigación y de ficción, recordemos la figura de un policía, el ya mítico comisario Villarejo. José Manuel Villarejo es la expresión de la fuerza policial en su relación con el poder. Ha conocido y se ha relacionado con todos y cada uno de los estamentos que mandan en España. Ha sido relacionado con el espionaje a rivales políticos de quien ocupaba el poder, con sobornos, financiaciones ilegales de partidos, montajes policiales para socavar la imagen de personas y movimientos políticos y chantajes, entre otras lindezas. El hombre dice tener una serie de grabaciones enorme de sus variadas y turbias relaciones, que de vez en cuando filtra y que van produciendo un escándalo tras otro, pero ninguna condena en firme para él. Aunque se suponga que muchas de sus historias sean falsas, resulta un paradigma de lo imposible: un policía (luego ya expolicía) que, por órdenes del poder político, actúa al margen de la ley (esto, reconocido por él mismo, sea o no demostrable) movilizando recursos y personas con tal alcance que parece inexplicable que, precisamente al cuerpo experto en investigar, se le escape durante años. Cabeza de turco o cerebro de oscuras operaciones, deja en muy mal lugar a toda una serie de responsables y subordinados que, o han colaborado con él, o han hecho una labor de vigilancia mejorable, desde luego.

Este policía, que parece haber estado en todos los lugares en los que el poder se movía y en las salsas de todos los guisos de las cloacas del Estado, suma su nombre a una lista en la que podrían figurar Francisco Paesa, antiguo miembro del CESID e implicado en estafas y trapicheos varios; José Amedo, comisario implicado en terrorismo de Estado, junto con Michel Domínguez, inspector,

Miguel Planchuelo, jefe de la Policía de Bilbao, o Francisco Álvarez, jefe del Mando Único Antiterrorista (estos dos últimos, condenados, pero posteriormente indultados); Juan Alberto Perote, responsable de comandos del CESID y condenado por escuchas ilegales; Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil, condenado por secuestro y asesinato o, por supuesto, los policías implicados en el golpe de Estado del 23 F. En todos los casos, miembros de las fuerzas de seguridad que han participado en operaciones *muy delicadas*, como gustan en llamarlas los que prefieren no utilizar el más certero adjetivo *sucias*. El poder en estado puro.

Capítulo 7
APARENTAR Y SER

Abandonemos en este capítulo en la labor policial respecto a la represión en los movimientos sociales. Hemos empezado por la parte más espectacular, la de las tramas descubiertas (ciertas o no), la apertura de causas y la puesta a disposición del juez. Lógicamente, este no es el primer paso. Si formas parte de algún grupo o de alguna acción que trate de mejorar el mundo, ya sabes que la policía reca- bará datos sobre ello. Si ese grupo o acción resultan ser perjudiciales a los intereses del Estado o del capitalismo, es bastante posible que la información se amplíe. Si ese grupo o acciones extienden su radio de influencia o de intensidad y corren el riesgo de extenderse, la policía y sus ramificaciones desearán tener información de primera mano.

En los tiempos que corren, algo de esa información puede obtenerse desde un despacho, con un ordenador y una conexión a Internet. La indiscreción de las redes sociales puede hacer el resto. Eso, y cierta inocencia de los militantes de causas sociales, que pocas veces consideran la posibilidad de que un astuto policía esté velando

por la seguridad nacional mientras curiosea su perfil de Twitter, pregunta inocentemente en un grupo de Telegram o participa en un foro más o menos abierto.

Sin embargo, hay taimados revolucionarios que no cuentan sus verdaderas intenciones en Internet y, por ejemplo, convocan manifestaciones o hacen revistas sin pasar antes por la red y, claro, cuando salen a la luz, la cosa no tiene remedio. Incluso hubo un tiempo en que el control telemático era imposible, y algunos ancianos lo recuerdan, pues no habían nacido ni la red de redes ni los teléfonos móviles. En aquellos tiempos, el sufrido policía debía ir a los lugares de socialización de los rebeldes y poner la oreja mientras, a menudo, se castigaba el hígado con rudos brebajes proletarios esperando que los aguerridos antisistema soltasen alguna perla informativa que mereciese la pena. Hay que reconocer que su nivel de vida debe haber mejorado, ahora que puede evitar esos tugurios.

El caso es que la infiltración policial en movimientos sociales es un hecho. Más o menos habitual, pero un hecho. Esto no supone sorpresa. Incluso los infiltrados por ordenador reciben el poco original nombre técnico de *agente encubierto informático*, en una demostración de que la prioridad de adjetivaciones no es el punto fuerte de los legisladores. La Ley de Enjuiciamiento criminal indica: «El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación» para delitos de diferente tipo, que van desde la trata de personas hasta el genérico «contra el orden socioeconómico». Incluso permite a la policía intervenir en comunicaciones de la patronal ante delitos contra los derechos de los trabajadores. Desconocemos si esto ha sucedido.

En cuanto a los agentes *encubiertos* no informáticos, la ley indica que tendrán una identidad falsa durante seis meses, prorrogables como un contrato de la hostelería y pudiendo mantener esa identidad en el momento de declarar en un posible juicio. Y, lo más parecido a aquello de licencia para matar, los infiltrados estarán exentos «de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma».

Y bien, pensarán algunas personas. No parece ninguna cosa mala que el Estado prevenga escuchando o estando atento a los posibles delitos que se puedan producir. ¿No es mejor que haya un policía en una organización poniendo la oreja a que esta organización pueda cometer un atentado, un daño a otras personas o un grave delito?

Puede que sí. Pero recordemos algunos aspectos que suelen pasarse por alto. En primer lugar, desde la propia ley se indica que la infiltración se realiza para delitos de delincuencia organizada. Considerar al movimiento ecologista, por ejemplo, como un nido de delincuencia organizada, quizás sea un juicio de valor que implica un posicionamiento ideológico, algo muy poco sano para un sistema que proclama la libertad de pensamiento y expresión. Lo mismo sucedería con la mayor parte de los movimientos sociales, cuyo fin principal no suele ser delinquir de forma coordinada, mal que le pese a los generadores de noticias treméndistas.

En segundo lugar, la posición del agente encubierto es complicada. Enviado a buscar resultados, que es la base de la práctica policial, necesita sacar algo en claro. Tiene poco tiempo, además.

Solo seis meses para justificar que anda metido en el epicentro de una banda peligrosa. A menudo, desde los movimientos infiltrados, e incluso desde algunos juristas, se ha considerado que existe una fina línea entre la infiltración policial de carácter informativo y la provocación de un delito. Es decir, existen un montón de casos en los que se ha considerado por parte de los acusados que la policía incitaba a un delito para luego poder detener a los implicados.

Esto es lo que se denomina *delito provocado*. Según la ley, los agentes infiltrados no pueden provocar un delito. Este sería una incitación a cometer aquello que está penado. Por ejemplo, en uno de los casos más sonados de infiltración policial junto a la acusación de montaje, el ya citado caso Scala, los implicados acusaron a Joaquín Gambín de liderar el fatal ataque. Gambín era un infiltrado policial en un momento de tensión social, la Transición, en una organización anarcosindicalista que iba cobrando fuerza y que se oponía rotundamente a los diferentes pactos que hacían del sindicalismo una piltrafa en manos del capitalismo socialdemócrata. Los afiliados que participaron en el lanzamiento de cócteles molotov a la sala barcelonesa eran unos jóvenes anarquistas probablemente deseosos de acción. ¿Fue el infiltrado quien convenció a estos jóvenes de algo que, sin él, no hubieran hecho de ninguna forma? ¿Fue solo el facilitador de algo que iba a suceder tarde o temprano? En general, es siempre imposible saberlo, a pesar de que una actuación policial que facilitase un delito hasta ese punto sería incompatible con la imagen de guardianes del orden y de protección. En este caso, porque se saldó con la muerte de cuatro personas.

De cualquier manera, revisando sentencias en torno a este tipo de defensa de delito provocado, cualquiera puede darse cuenta de

que las acusaciones suelen ser rechazadas. Especialmente importantes son diversas sentencias del Tribunal Supremo, que entra de lleno en sutilidades casi filosóficas para evitar la condena policial o la absolución de los presuntamente provocados. Si en 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictado que un delito provocado era en el que los agentes «incitan a cometer un delito que, sin esa influencia, no hubiera cometido», nuestro tribunal, más dado a la sabia especulación, defendía en 2011 que este delito «aparece cuando la voluntad de delinquir surge en el sujeto no por su propia y libre decisión, sino como consecuencia de la actividad de otra persona». Ahí es nada, dilucidar la libre decisión. No la influencia, sino la determinación de la decisión. Ahondando en el intento de eliminar al máximo la posibilidad de delito provocado, el tribunal defiende que «se niega la existencia del delito provocado cuando la actuación policial haya tenido lugar incidiendo sobre una conducta ya existente que permaneciera oculta». Es decir, que si tenías intención, si eras delincuente en potencia, la actuación policial, del tipo que fuera, solo habría pasado a acto tu esencia. Aristóteles judicial.

En conclusión, las sentencias sobre delito provocado se dan en casos en los que la actuación ya es flagrante. Por ejemplo, en alguno de tráfico de drogas en el que son los policías los que hacen aparecer la sustancia y los acusados se limitan a una transacción del material suministrado.

Pero, ¿qué sucede en el caso de los movimientos sociales? Para empezar, están formados muchas veces por gente joven, incluso muy joven, con menos experiencia en sufrir manipulaciones. Probablemente, los diferentes militantes tienen una sensibilidad social alta y una predisposición a actuar. No se entienda ese actuar

como violentar personas, por supuesto, sino como la necesidad de intervenir en la sociedad para cambiar aspectos concretos o dinámicas globales. Dada la solidez del sistema, su amplitud y sus mecanismos de defensa, estos intentos tienen éxito parcial. De lo contrario, los movimientos sociales habrían alcanzado su objetivo y se habrían disuelto. Por lo tanto, todo militante atraviesa un momento (o más de uno, si sigue siendo militante mucho tiempo) de frustración por lo no logrado, por la incomprendición que lo rodea o por otros motivos que no son objeto de estas reflexiones. Puede surgir la necesidad de reforzar la acción, de ampliar su contundencia. ¿Es esto ya un delincuente potencial? Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir entrar en el pleno de un Ayuntamiento a proclamar las verdades del barquero a la cara del equipo municipal de turno. Esto está penado. Si ocurriera a propuesta de un agente encubierto, ¿se trataría de un acto que sin incitación no se hubiera producido o de un acto existente ya de forma oculta? Difícil distinción, pero previsible sentencia.

En tercer lugar, la imagen policial, acompañada de los elementos que hemos ido viendo, desde series a películas, documentales o libros policiales, se proyecta como un engranaje profesional y casi perfecto, una imagen que queda afectada cuando se transcribe su realidad.

En 2016, unos policías contactan con un hombre de 28 años que militaba en entornos libertarios barceloneses. Buscan obtener información de las casas okupadas de la zona. Hacen varias entrevistas, que basculan entre la oferta y la amenaza. El hombre decide grabar las conversaciones y estas salen a la luz. Le dicen:

Nosotros te ofrecemos una contraprestación económica. [...]
Habrá una contraprestación fija. La contraprestación es de alguna

manera mensual, que te podemos ingresar en alguna cuenta que tú te abras o te la podemos dar en mano, como quieras [...]. Luego, depende de las informaciones, relevantes o no relevantes, de la explotación operativa que nosotros podamos hacer, si hay alguna cosa realmente trascendente, pues también tendrás, digamos, una especie de mejora, o de cosa puntual, o de llámalo como quieras.

O sea, que le indican que debe hacer de confidente, que tendrá un sueldo fijo más incentivos, a modo de vendedor, y que esos incentivos irán en función de los delitos que pueda denunciar. ¿Y si esos delitos no existen? ¿Hasta dónde llegaría el joven de 28 años para aumentar su salario? Porque hay que reconocer que generoso, lo que se dice generoso, no es: «En principio, te podríamos dar unos 200 o 250 euros, para que empieces a funcionar, siempre y cuando tienes que entender que es una cosa que nosotros también tenemos que ver».

Días más tarde, otro agente apunta que es «Un tema de contraprestación que te puede servir, qué sé yo, para irte de vacaciones a algún sitio». La policía compra barato confidentes y viajes, por lo que se ve.

A continuación, el militante pregunta si hacer esta labor le puede beneficiar en un proceso que tiene abierto, pero el agente se queja amargamente de que no pueden tocar a los jueces. A los fiscales sí, porque son putos funcionarios, pero los jueces no, dice.

En estas palabras tenemos los ingredientes de la desmitificación. Unos agentes chapuceros que dejan que los grabe un chaval. Una prisa por obtener resultados en forma de delito y además, cuanto más graves mejor. Un objetivo que no parece ser una red de delincuencia organizada, sino una alternativa al capitalismo: las

casas okupadas barcelonesas. Una manera chusca de comunicarse, mezclando el lenguaje parajudicial con la chabacanería propia de los bajos fondos de novela.

La idea de un cuerpo policial protegiendo a la ciudadanía del mal por medio del pago de 200 euros a una persona para que denuncie a los okupas de su ciudad es extraña. Incluso podría ser calificada de cutre. El modus operandi, según el ministro de Interior del momento, era el habitual. Sin inmutarse. Intentar que una persona con una causa judicial menor se convierta en confidente por una propina, suministrando información sobre un movimiento social.

Desde luego, resulta más barato y sencillo que el agente encubierto. Cuando alguien se imagina a uno de estos, cree que vivirá en un entorno mafioso en el que cualquier desliz le costará unos pies de cemento y un lecho en el fondo del Mediterráneo, así que rescatar información a través de un okupa es como ver a los leones en un documental de la tele, más tranquilo, pero igual de impactante.

No todos los casos de infiltración han sido de este tipo, claro. En diferentes movimientos sociales ha habido sospechas más o menos fundadas de agentes encubiertos. En casi ninguno de estos supuestos ha habido una confirmación total, aunque algunos parezcan ser muy evidentes. Por supuesto, los movimientos sociales nunca han practicado la venganza sangrienta que se supone en las series y películas. Tampoco han sido desarticulados. Generalmente, porque no había nada que desarticular. Los agentes actúan a modo de justicia preventiva. Tantean por si hay algo. Sospechan que los okupas, los ecologistas, las feministas, el sindicalismo o cualquier otra expresión de rebeldía puede ser un nido de delincuencia organizada. Y allá van, como si se tratase de extraer información de los Corleone.

El efecto que se produce cuando se destapa alguno de estos casos es singular. En general, el agente infiltrado era una persona reservada pero cumplidora. No solía implicarse especialmente en nada, pero andaba en todos los saraos. Nadie conocía su casa, pero él daba muestras de conocer el entorno, el barrio, la ciudad. Parecía alguien sensato y capaz de escuchar a los demás. En ocasiones, parecía haber forjado amistades. Incluso algo más. Relaciones sentimentales. Descubrir que se trataba de un policía causa sorpresa, enfado, decepción y una sensación de debilidad (¿cómo no lo vimos venir?) que puede terminar en actitudes paranoides, en manuales contra la infiltración que invocan la inacción, en sospechar de todas y cada una de las personas que se acercan, en el cierre en banda, en el gueto.

Los agentes encubiertos, físicos o digitales, son una realidad. Como sociedad, podemos preguntarnos qué hace que el Estado pretenda infiltrar elementos en movimientos sociales que buscan la justicia o la libertad y no, por ejemplo, en la Iglesia, que ha sido acusada de más delitos que ninguna organización existente. O en la banca. O en las gestorías de la empresa Abengoa, por poner un ejemplo al azar, que ha mangado en impuestos más de 30 millones de euros, algo que pocas organizaciones mafiosas podrían lograr.

Y los movimientos sociales pueden reflexionar sobre esta figura, sobre el uso de datos en Internet o sobre protocolos de discreción (imaginemos que un político visita un barrio y se le quiere recibir con pancartas; nadie que esté implicado quiere estropear el factor de agradable sorpresa, por ejemplo), pero asumir que esa infiltración siempre es posible, como posible es que alguien acabe actuando de confidente. Eso sí, a la policía habría que pedirle un aumento de la *contraprestación*.

Capítulo 8
«TRABAJO» POLICIAL

Fruto de lo que venimos comentando desde los primeros capítulos, ser policía se percibe cada vez más como una salida laboral corriente y su actividad como un trabajo cualquiera. A pesar de una larga tradición, que ha distinguido su cometido de otras esferas productivas, se puede afirmar que en los últimos veinte años ha habido un giro interpretativo y lo policial se sitúa al mismo nivel que otras profesiones, sea la de profesorado, enfermería, abogacía o agente de turismo.

Como apuntábamos en capítulos anteriores, en las ferias que muestran a los estudiantes diferentes opciones de estudios, aparece lo policial. En las encuestas de valoración de instituciones, aparece bien situada la policía. Se han creado grados universitarios de vocación policial (Criminología y sus variantes) y empieza a haber cursos de diferente tipo vinculados a la seguridad, desde *Atención sanitaria inmediata para cuerpos de seguridad y defensa* hasta un *Curso de certificación de seguimiento encubierto*. Dado que hemos llegado a un punto en que todo oficio, trabajo o profesión se vincula a un

título, no es de descartar que en próximos años surja el grado universitario o la titulación de formación profesional de policía. Esto terminará de normalizar el mundo policial, en cuanto a considerarse una tarea más, como decimos. Como mucho, la excepcionalidad se percibirá como un plus, como un aporte de heroicidad al mundo, como una mejora de un trabajo ya de por sí apasionante.

Pero, ¿es lo que hacen los policías un trabajo como otro cualquiera? ¿Son los policías, por lo tanto, trabajadores, igual que la gente del sector de la construcción o del metal?

Vamos a ahorrarnos una disquisición sobre lo que significa *trabajo*. Prescindiremos de las bizantinas discusiones sobre si trabajo es aquello que transforma objetos en mercancías, si trabajo es aquello que sirve para producir, si lo es el trabajo doméstico, si es también trabajo lo que ofrece un servicio, sea cual sea este o si el trabajo es la mera actividad que contribuye a la creación de condiciones para el desarrollo de la vida. Para nuestro propósito, nos basta con algo más sencillo, con ese *aire de familia* que tienen las actividades necesarias para una sociedad que suelen desarrollar aquellos que se denominan *trabajadores*. Sabemos que es una definición parcialmente circular (en cuanto a que el trabajo es lo que hacen los trabajadores, claro), pero nos sirve para nuestro objetivo, que es una comparación en torno a ese *aire familiar* que tienen las actividades que realizan los trabajadores, algo que no es tan inocente como aparenta. Por ejemplo, alguien que está disfrutando de un concierto no está trabajando, como se intuye sin demasiado esfuerzo. Tampoco es un trabajo lo que hagan los empresarios, ya que, por definición, no son trabajadores.

¿Y los policías? ¿Qué semejanzas o diferencias tienen con los trabajadores?

Indudablemente, comparten algunos rasgos: tienen un horario, usan ropa de trabajo, ganan un salario por ello, tienen grados y posibilidad de ascender, necesitan formación específica, incluso exponen de manera pública lo que dicen ser reivindicaciones laborales. Comencemos por ahí.

En el mundo policial existen también elecciones sindicales. Según la legislación, se excluye a la Guardia Civil, que es un cuerpo militar y, por lo tanto, tiene prohibidos los sindicatos, aunque se hayan creado asociaciones que realizan similar labor que la de los otros sindicatos policiales, sin que sean objeto de especial persecución desde hace mucho tiempo.

A estas elecciones sindicales concurren diferentes asociaciones. En el caso de la Policía Nacional, el cuerpo que ocupa todo el territorio, quien se lleva el gato al agua es JUPOL. Esta es una organización peculiar. Nació de una anterior plataforma llamada JUSAPOL, cuya entrada en escena se produjo por el ruido que hicieron sobre un asunto económico (decían que los policías nacionales y los guardias civiles cobraban menos que los policías autonómicos y pedían cobrar lo mismo. Es decir, cobrar más. Hasta 900 euros más al mes). Los jefes de la plataforma aprovecharon la estructura de otro sindicato minoritario, UNIPE, para presentarse a las elecciones como JUPOL. Como los guardias habían asociado la capacidad de movilización de JUSAPOL por lo del dinero con JUPOL, los votaron (más del 60 %), desplazando a opciones más tradicionales. Todo esto en un contexto en el que coleaban aún las actuaciones policiales respecto a un simulacro de referéndum montado por el independentismo catalán, que hinchó los pechos del nacionalismo español, bastante bien representado por JUSAPOL.

El caso es que las elecciones las gana esa plataforma, en cuyos principios dice ser apolítica, que cuida sus declaraciones oficiales para no ser asimilada con ningún partido, pero a la que le ronda siempre la sospecha de estar más en la onda de la nueva ultraderecha que de la socialdemocracia o la democracia cristiana. Quizá tenga que ver con que algún miembro haya sido condenado por amenazas hacia un partido de izquierda o con que un grupo de los mismos se haya manifestado delante de la casa de un vicepresidente con otras perlas del fascismo patrio, o que usen los mismos argumentos que el partido de ultraderecha para que no se derogue una ley de *seguridad*. O porque su estética de manifestación sea indistinguible de las de los movimientos ultras europeos. O porque en sus redes sociales escriban *Español* con mayúsculas (en aras de sonar más contundente, estaría bien poner un par de esos más: *Esspañol*). O porque se suman a diferentes campañas de la ultraderecha nacional, pero a ninguna de otro sector ideológico. O porque usan términos como *bilduetarra* para definir a alguna parlamentaria, lo que suele indicar cierta inclinación ideológica. Vaya usted a saber. Igual es una acusación injusta. Igual el portavoz de una asociación de guardias civiles es un maledicente cuando dice que, si se les acusa de ser el brazo policial de la ultraderecha, *por algo será*. Lo mismo es al revés, y la presencia de dirigentes ultras en sus manifestaciones, indeseada por el sindicato, es un intento de captación.

Lo singular es que no se conoce ningún otro sector en cuyas elecciones sindicales sea mayoritaria una organización sospechosa de resultar de ultraderecha. Es más, algunos de los perfiles destacados que se asocian a los que ganaron las elecciones sindicales hacen gala

de despreciar el sindicalismo con los tradicionales argumentos de la derecha.

En cuanto a las reivindicaciones policiales, si alguien leyese sus manifiestos (y esto es común a todas las asociaciones policiales), pensaría que se mueven en un infierno cotidiano. Carecen de los más elementales medios para realizar su tarea, tienen salarios miserables, están sometidos a turnos agotadores e inacabables y su índice de suicidios es abrumador. Además, el gobierno los desprecia. Por lo tanto, piden justamente más medios: más trajes, más material antidisturbios, más coches, más armas. Piden también más dinero: aumento de salario, de complementos salariales, de pensiones, de coberturas por baja... Piden más policías, claro. Ya sabéis: trabajar todos para trabajar menos. Y piden apoyo psicológico, porque al año se suicidan más o menos 15 policías (referido a la Policía Nacional), de las 3500 personas aproximadamente que se quitan la vida en España. Por último, piden reconocimiento, honor, consideración.

Esto último lo hacen vigilando las opiniones que se vierten sobre la policía, saliendo a la palestra cuando se sienten mal tratados e incluso buscando la prohibición de actos o de producciones o la sanción de quien menoscabe su prestigio, según su visión. A esto ayudan las leyes, que protegen celosamente a los agentes. Solo en dos años, gracias a la peculiar ley de seguridad ciudadana que citábamos más arriba, los policías consideraron que se les había faltado al respeto en las calles unas 48.000 veces. Una cada media hora. Inaceptable, la mala educación reinante.

También defienden su honor respecto a películas, series, vídeos de Internet, comentarios en redes sociales o memes. Una labor calderoniana.

Por lo demás, en general, las reivindicaciones son parecidas a las de cualquier otro cuerpo de funcionarios, si bien tienen un tono dramático que trata de recordar que la policía mantiene una guerra constante como protectora de la sociedad, que indudablemente les debe mucho. Solo por ese motivo, un policía puede considerar que merece el sueldo de cualquier otro funcionario al que se le exija formación universitaria (para entrar en la policía se exige Bachillerato), porque andar en las calles vigilando nuestro sueño es más de lo que nunca podrán hacer los demás. Todo ello mezclado con un sorprendente materialismo que les ocupa tanto tiempo como a cualquier otro miembro de la administración, entre la pelea por trienios, reconocimientos, ascensos, destinos cómodos y demás líos funcionariales.

A este clima de heroísmo se añade un continuo recuerdo de la muerte. Todas las redes sociales y muchos actos policiales internos exponen con frecuencia la muerte de otros agentes. Las causas de la muerte son más o menos las mismas que en otros sectores de la población, exceptuando las relacionadas con el desempeño de sus funciones (en 4 años, 13 policías mueren en *acto de servicio*. En solo un año, por ejemplo, en el sector agrario se producen 46, en fábricas 95 y en la construcción más de 100). No parece ser una tarea con más riesgo mortal, a pesar de la imagen que vierten.

En lo referente a sus medios de protesta, los hay similares y también diferentes. Los policías se manifiestan. Incluso generan tensión con sus compañeros que los vigilan. Los policías hacen carteles, pegatinas, folletos, panfletos, ruedas de prensa, sacan revistas... como cualquier otro colectivo. Eso sí, los policías tienen un acceso al poder diferente. Se reúnen con frecuencia con el poder y tienen

parte de ese poder, algo muy alejado de colectivos como el sector de la limpieza, el agropecuario o el del transporte, por decir algunos. Ninguno de estos colectivos tiene más armas que la movilización y... la huelga. Dejar de producir, interrumpir el servicio, para poner de manifiesto lo necesario de un trabajo y el cese del ciclo del comercio y el consumo para presionar por unas condiciones mejores. Eso no lo hace la policía. No declara huelgas. Principalmente, porque lo tienen prohibido. Al igual que los militares. Y que los patrones, claro. Ningún trabajador tiene prohibido el derecho a la huelga, fruto de las luchas incessantes del movimiento sindical (vamos, que no siempre fue un derecho), pero la ocupación de los policías, según la ley, es algo diferente.

Hasta aquí, el entramado *sindical*, cuyas organizaciones mayoritarias, a diferencia de los sindicatos *tradicionales*, se inclinan hacia la derecha, a veces casi hasta 90 grados. También sus demandas, mezcla de espíritu de funcionario y héroe cotidiano, con sus mezquindades y su defensa de imagen (por cierto, algo que ningún otro colectivo profesional puede hacer con esa fuerza. Imaginen al sindicato de la construcción denunciando por falta de respeto algún perfil de redes sociales por hacer escarnio de la figura del albañil como ignorante y machista, por ejemplo. O a alguna de las asociaciones de defensa de las trabajadoras de la limpieza amenazando con llevar a juicio a alguna serie española que reproduce los estereotipos sexistas sobre su colectivo) y sus formas de presionar, desde las habituales hasta su conexión con el poder y la prohibición de la huelga, instrumento clásico y mítico de la clase trabajadora.

Pero convendría avanzar en la descripción de la actividad del policía, aun admitiendo su variedad (hoy hay policías en todas par-

tes y cumpliendo misiones antaño inimaginables para esa fuerza), por aquello de seguir la comparación con otros trabajos.

Según los escasos estudios de campo, la mayor parte del trabajo policial, como la de cualquier funcionario, consiste en rellenar papeles relacionados con la burocracia. Informes, atestados, denuncias y un largo etcétera convierten parte de la jornada de los guardias en algo indistinguible de la labor de un administrativo. Eso genera la misma queja que en el resto de cuerpos que se consideran imprescindibles y que no entienden que tengan que dedicar al papeleo el tiempo que podrían estar empleando en su vital función, sean profesores, médicos o trabajadores sociales. Por lo tanto, la idea de un policía doce horas al día en la calle, corriendo de aquí para allá a la caza del mal, o guardando concienzudamente la paz del barrio, visitando comercios y saludando a las ancianas, quizás no se corresponda con la realidad. Visto esto, por lo tanto, un policía es un funcionario como otro cualquiera, con sus impresos y sus informes que nadie leerá si no ocurre ninguna situación excepcional.

En realidad, la tarea fundamental de la policía en la calle es guardar el orden. Controlar la paz social. El orden, lógicamente, por su propia definición, es algo subjetivo. En las sociedades, el orden se percibe como una propiedad de conservación, cuando no de reproducción. Hay orden si nada altera el estado actual de las cosas. Hay desorden cuando lo cotidiano se ve afectado y, sobre todo, cuando ese cambio de la situación inicial ordenada no se produce por los cauces marcados por la autoridad. La autoridad puede generar cambios, pero estos no serán desorden. Un ayuntamiento puede, por ejemplo, autorizar las fiestas del pueblo, contratar a una orquesta y que esta ande tocando hasta las 2 de la mañana pasodobles, pero eso

no es desorden, sino organización de la excepcionalidad. Si la muchachada del pueblo decide cantar coplas un sábado en el mismo sitio a las 11 de la noche, eso es desorden. Las molestias y el disfrute que pueda generar una u otra situación son similares (supongamos que la muchachada del pueblo afina que da gusto), pero una situación es indiscutible, porque la ordena la autoridad, y la otra es caos.

Cuando la policía patrulla las calles, lo que busca es el orden. La calle no es el lugar en que se gesta el delito grave y mucho menos es el lugar en el que, en caso de gestarse, se detecta. Ninguna estafa millonaria se gesta en la calle, sino en oficinas con buena conexión a Internet. Ningún homicidio se planifica en la calle. Ningún asesinato se proclama en la calle justo a tiempo para que un afortunado coche policial pase por allí y lo evite. Quienes deciden que miles de personas se inmolen por la patria, la religión o el petróleo, no lo hacen en la calle. La destrucción del medio ambiente no se diseña en las calles, sino en despachos de madera noble. Hay más violaciones evitadas por vecinos que por policías (lógicamente, pues vecinos somos todos y, por lo tanto, estamos en todas partes). La calle es el lugar de la falta menor, del pequeño desorden, del paso de personas, siempre sospechosas, pero no del daño social. Las patrullas guardan de la alteración de lo cotidiano, de la paz del pequeño comerciante y del vecino miedoso aleccionado por los telediarios, que plasman los barrios y los pueblos como lugares de riesgo. Las patrullas han ido sustituyendo a los vecinos. Allá donde había niños y viejos de manera permanente, ahora solo quedan policías aparcados y gente que pasa. Ese es el ideal del capitalismo: nadie fijo, nadie quieto, todo el mundo caminando hacia el comercio más próximo, mientras en una esquina, aparcados, los agentes del orden vigilan que nadie se pare.

Y si la calle no es el despacho del gran crimen, ¿por qué nuestros barrios, carreteras y pueblos han sufrido la invasión de la policía a una escala mayor que nunca?

La policía es señal de que el orden no va a cambiar. De que lo anómalo puede darse por poco tiempo, de que será reconvenido para que se integre. De que, en cada calle, podrás ser identificado, vigilado, regañado, juzgado y sancionado, a criterio de los agentes. Prueba a cantar a voz en grito, a bailar en grupo, a jugar alegre y masivamente. Serás percibido como enemigo. Te pedirán permisos y documentos. Serás identificado como el desorden y alguna ordenanza habrá para que todo vuelva a la paz.

Las contradicciones de un sistema económico profundamente injusto salen a la luz en la calle, es cierto. Las diferencias de clase son palpables de manera notoria en las ciudades. Dicho de manera transparente: hay barrios ricos y barrios pobres. En unos barrios, la gente es ordenada por educación, pues el orden es su orden. Sus casas son espaciosas. Si el barrio es de construcción reciente, sus casas son espaciosas y además están lejos unas de las otras. En calles distantes, pensadas para el coche y para el *running*. No para encontrarse. Entre edificio y edificio cabe una aldea. Un perfecto ajedrez ordenado con manzanas cerradas por valla y guardia de seguridad y con piscina o con hileras de chalés idénticos. El orden parece imposible de alterar. La actividad se realiza dentro de la urbanización. Lo vecinal da paso a lo gremial de bloque. No hay intereses compartidos más allá de la cuota de mantenimiento de las zonas comunes. Allí la policía solo pasea para buscar elementos ajenos, foráneos que invadan la paz vecinal. Por eso solo hay cámaras de vigilancia policial en los barrios obreros y en las zonas comerciales. En Madrid, solo las

hay en los barrios de Tetúan, Lavapiés y Vallecas. En Barcelona, no se vigila Pedralbes o Sarriá.

Miles de individuos armados y gastando gasolina recorren el territorio en busca del desorden, con el objetivo de restaurar la paz social. Armados. Esto, desde luego, no lo hace ningún otro trabajador.

Como es natural, el porcentaje de agentes que recorre las calles no agota el total de policías que hay. Es decir, de los casi 240.000 guardias de diferente tipo que recorren España, solo una parte anda en labores de calle. Otra parte importante se dedica a la llamada labor de prevención. Es decir, recopilar y realizar análisis de información de diferente tipo con el objetivo de evitar delitos. La policía siempre ha puesto el acento en lo necesario de esta labor preventiva, usando la buena impresión que causa el concepto para pedir más material y más medios. La lógica es aplastante: cada vez que se produce un daño social (que los hay, lógicamente; no lo negamos), en lugar de reconocer que las fuerzas de seguridad han fracasado o que nunca van a poder evitar todo el daño, se inicia la campaña de que la prevención es la clave, de que si se hubiera hecho esa labor preventiva con mayor intensidad, la tragedia no hubiera sucedido.

La labor preventiva, sin embargo, consta de diferentes elementos. Uno de ellos está incluso fuera de la propia institución policial e implica convertir a toda la población en colaboradora necesaria de las fuerzas del orden. Denuncie, ciudadano. Avise, llame, envíe un email, dé información. ¿Sobre qué? Sobre cualquier comportamiento anómalo que pueda indicar que alguien, en un momento dado, cometerá un delito. Si imaginamos la sociedad colaboradora perfecta, esto es un imposible. Millones de mensajes por todos los medios llegando

a las comisarías a diario. Un volumen de información imposible de manejar o analizar, a no ser que se abriesen dos vías: la privatización de la clasificación y filtración de mensajes o el uso de elementos cibernéticos para esa tarea. Como de momento estamos lejos de esto (vaya usted a saber si muy lejos o no tanto), la llamada a la colaboración acaba cumpliendo otra misión: la de identificar al ciudadano con la labor del confidente. Pero un confidente necesita estar alerta y, sobre todo, andar rodeado de malhechores a los que denunciar. La colaboración ciudadana siempre acaba relajándose precisamente porque al ser humano le cuesta, a pesar de la insistencia propagandística, ver al otro como un permanente enemigo.

El otro elemento, claro, es el de la sección policial dedicada a esa labor preventiva. Es decir, hay un número significativo de agentes que se dedica a hacer de la sospecha una rutina, vigilando a la población que no ha cometido el delito, pero por si acaso. Exceptuando quizás a los profesores, que vigilan pasillos y exámenes, no hay trabajo que comparta esta peculiar actividad.

La policía, como fuerza del orden y de la seguridad, tiene también como misión que la ley se cumpla. Así, en general. Sin embargo, como decíamos líneas arriba, en su actuación cotidiana se rige por criterios selectivos y arbitrarios (todo criterio que dé más importancia a una ley u otra sería arbitrario para un servidor de la misma) respecto a qué leyes pueden incumplirse y cuáles no, en qué momento y quiénes pueden saltárselas.

Apostaríamos a que ninguna persona saldría indemne si se aplicasen todas las leyes, disposiciones, normativas, ordenanzas y el resto de la maraña legislativa de ayuntamientos, diputaciones, comunidades y Estado. Por ejemplo, en Andalucía rige la prohibición de «La

permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana». No bebidas alcohólicas. No reuniones de doscientos vociferantes tenores a las tres de la mañana, sino personas que pongan en peligro la convivencia. Ahí cabe lo que a cada cual le dé la real gana. Si un grupo de vecinas anda charlando en la plaza del pueblo y echando unas risas, eso puede romper la pacífica convivencia de otro vecino que trabaje por las noches, vea alterado su sueño y comience a insultar a las mujeres. Teóricamente, la norma está incumplida. Policía, auxilio.

Desde 1992 hasta 2014 estuvieron prohibidas «las actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se occasionen daños a las personas o a los bienes», lo que viene a ser siempre, a no ser que alguien juegue en el desierto. Se ignora si hubo casos de policías disolviendo partidos de fútbol en plazas.

Todo grupo de peatones que forme un cortejo (qué cosas dicen las leyes) o que vayan dirigidos por una persona debe circular por la derecha. De lo contrario, deberá tener una multa. Vaya la Policía a Salamanca, a Granada, a Córdoba o a Santiago a perseguir grupos de turistas con guía que circulan de manera criminal.

Estos ejemplos son un tanto descabellados, pues lo extraño puede ser, no que los miembros de las fuerzas de seguridad no persigan o sancionen, sino la propia existencia de la norma. Pero sirven como muestra de que la policía sigue su criterio selectivo a la hora de sancionar comportamientos. Tiene herramientas para amonestar en casi cualquier circunstancia, herramientas que pueden activarse a criterio (y suponiendo a los policías el conocimiento de toda esta

legislación) de cada patrulla. Y eso, que las autoridades, los mandos policiales y los propios agentes defienden, supone la arbitrariedad, la subjetividad y la posibilidad de seleccionar también a los sujetos de sanción en función de criterios igualmente subjetivos. Y lo subjetivo, claro, depende del marco conceptual en el que cada cual se mueva. Es decir, depende de las ideas que tenga sobre el contexto en que deba aplicar la norma.

En ningún otro trabajo un grupo de personas aplica ciertas normas para el perjuicio de otros según un criterio no conocido.

Si la selección de comportamientos castigables es casi inevitable, la de los sujetos que se va a controlar prioritariamente, a los que se va a vigilar, identificar, arrestar o simplemente sospechar de ellos ha sido objeto de polémicas. Diferentes investigaciones insisten en que las identificaciones policiales tienen un sesgo étnico y de clase social. Esto es, la policía identifica constantemente a población percibida como migrante y de clase obrera. Así lo afirma Daniel Wagman en un estudio de 2005, añadiendo que buena parte de la población y la propia policía ven esto como consecuencia de que las minorías étnicas cometen más delitos. El proyecto STEPPS, una investigación europea para registrar el sesgo étnico en las identificaciones policiales, dio como resultado en Girona que personas de origen rumano eran identificadas 10 veces más que los nacidos en el país. Cuatro de cada cinco identificaciones de este grupo se saldaron con fracaso. En la otra ciudad en que se puso en marcha este proyecto, Fuenlabrada, los resultados fueron similares, pero el perfil étnico de las identificaciones se redujo tras un tiempo, al saberse los policías monitorizados. En 2009, la Agencia de Derechos Fundamentales europea analiza una encuesta que también muestra este sesgo en las identificaciones.

Incluso en diferentes ocasiones se han aprobado circulares policiales para que los agentes eviten estas prácticas. Como es obvio, solo se regula lo que existe. Si no hubiera esas identificaciones con sesgo étnico no habría circulares al respecto.

La policía, en diferentes comunicaciones a la prensa y a través de sus *representantes sindicales* ha negado racismo institucional. En algunas ocasiones, ha señalado a las autoridades políticas por diseñar actuaciones que conllevan este tipo de prácticas.

La cuestión es que parece que todas las investigaciones van en el mismo sentido: se identifica con sesgo. No vamos a insistir en lo señalado ya, pero esto tiene relación con dos importantes asuntos: qué delitos se seleccionan y qué marco ideológico tienen los agentes.

En cualquier otro trabajo, una orientación con sesgo étnico sería juzgada. En el ámbito policial, esto no ha tenido mayores consecuencias.

Acabemos esta sección con algo muy propio de la labor policial que tampoco se realiza en ningún trabajo: la aplicación de la violencia contra otros trabajadores que buscan mejorar sus condiciones. Claro que existen envidias e incluso críticas entre sectores laborales. Prácticamente han desaparecido los tiempos de la solidaridad obrera. Hoy día, una huelga como la de La Canadiense, que dio origen a la firma de la jornada de ocho horas por primera vez, y en la que un conflicto con unos oficinistas se convirtió en huelga general, es casi inconcebible. Pero de ahí a tener como tarea la represión de la actividad sindical hay un trecho. Un trecho enorme.

La tradición policial de represión contra el mundo obrero ocupa una lista tan larga de hechos que daría para otro libro. Algunos de los casos los hemos citado hablando de los montajes policiales. Otros

han ido desde los golpes o cargas policiales ante manifestaciones, piquetes o demostraciones de cualquier tipo, hasta los disparos con resultado de muerte. Da igual la época. Da igual en la Restauración durante la Semana Trágica, en la República en Castilblanco o Casas Viejas, en el franquismo con los múltiples casos de tortura de la Brigada Político Social o ya en democracia en Vitoria en 1976, durante la reconversión industrial o en cualquier huelga general. La imagen es siempre la misma. A un lado, los trabajadores reivindicando mejoras y al otro la policía, guardando el orden. A menudo, guardando el orden a golpes. Protegiendo a los esquiroles (ahora se llama *derecho a trabajar*, curiosamente), a los patrones. No se conocen datos de policía protegiendo a trabajadores que quieran hacer huelga y se vean presionados por los *emprendedores*. Quizá los haya. De lo que sí hay muchos testimonios es de que, allí donde ha habido movimiento obrero activo, la policía ha actuado en su contra.

Esto sí que no lo haría ni el trabajador más retrógrado del mundo. Dedicar parte del esfuerzo en ir en contra de la propia clase trabajadora. Es posible que lo de la policía no sea «un trabajo como otro cualquiera».

Capítulo 9
LA MENTALIDAD POLICIAL

En los primeros capítulos del libro hablábamos de la ocupación del espacio físico y cultural por parte de la policía. No solo es casi imposible recorrer una ciudad mediana sin toparse con varios agentes, sino que es impensable ya que entre las películas o libros de mayor éxito no haya varios en los que un policía tenga un papel heroico y relevante.

Causa o consecuencia de esto, el caso es que la cultura policial, los conceptos básicos que son compartidos por una amplia parte de las plantillas de las fuerzas del orden, han calado en la sociedad. Por eso es relevante echar un vistazo a alguno de los lugares comunes que maneja y proyecta el colectivo.

La policía, en el desarrollo de su tarea, tiene un trato preferente con aquello que venga a denominarse delincuencia. Bien como institución que señala o vigila a posibles delincuentes, bien como grupo que los persigue. En cualquier caso, el peso del concepto de la delincuencia en la configuración de su mundo es, lógicamente, relevante. La idea policial de la delincuencia, vinculada a la

de justicia que comentábamos capítulos atrás, es fundamentalmente simple: algunas personas cometen delitos porque son malas; esas personas son delincuentes porque cometan delitos; toda persona puede convertirse en delincuente, pero algunos colectivos tienden a serlo con mayor frecuencia; raramente los delincuentes cambian de hábitos; aunque se puede comprender que algunos delincuentes han tenido una vida complicada, al final eligen cómo quieren vivir; a la delincuencia hay que tratarla con medidas policiales y con sanciones judiciales. Y esto más o menos es todo.

Cuando se accede a la interpretación del mundo desde una óptica así, los matices son francamente complicados. Casi como en un mundo de superhéroes, el universo se divide entre buenos y malos. Buenos que salvarán el mundo y malos que quieren dominar el mundo porque son malos. Una sociedad constantemente amenazada por fuerzas poderosas y perfectamente organizadas ante las que solo puede oponerse una incansable lucha que, aunque nunca conseguirá derrotar del todo al enemigo, sí podrá mantenerlo a raya para que no se derrumbe la civilización.

Así, la policía se convierte en un último escollo salvador de la sociedad. Desde la mentalidad policial se sabe que hay otras instituciones que trabajan para atenuar los conflictos, desde trabajadores sociales hasta escuelas, pero, conscientes de que la suya es la tarea fundamental, miran por encima del hombro a esos colectivos. Incluso los consideran, a veces, instituciones que no consiguen nada real, sino que son la puerta abierta a la complicidad de algunas partes del sistema con la propia delincuencia. Es decir, son la mano blanda que intenta parar un golpe duro. Algo inservible.

Lo curioso es que esta mentalidad se haya trasladado a la sociedad sin mayores problemas. Todas las instituciones han sido sometidas, y con razón, a una crítica profunda en los últimos años, excepto la policía (y, probablemente, el ejército, desde que se convirtió en profesional). Nadie confía ya demasiado en el poder de la educación para evitar la ruptura social ni en el de la familia ni en el de los periodistas ni en el de los servicios sociales ni qué decir en el de la Iglesia, instituciones que no hace mucho vertebraban el consenso de los conformistas. Pero nadie critica la incapacidad policial para acabar con alguno de los delitos sobre los que se vuelca. Casi no se oyen voces ya que indiquen que ese fracaso pueda tener que ver con que la solución policial es, como mínimo, incompleta, o con la incapacidad del cuerpo, por ejemplo. Y las pocas voces que lo indican casi lo hacen como inercia de discursos anteriores, no como propuesta real.

De esta manera, la policía queda como ese bastión que resiste con arrojo lo que una sociedad reblandecida no quiere asumir: su propia defensa.

La mentalidad policial señala ese doble discurso con frecuencia. La policía se considera encargada de lidiar con un enemigo, la delincuencia, que no tiene reparos en usar cualquier medio, mientras la sociedad, bien pensante, políticamente correcta o *buenista*, exige a los agentes un trato exquisito con unos medios precarios. Se representan a la sociedad como un niño caprichoso que lo quiere todo, pero sin realizar esfuerzos para ello y se autorrepresentan como un resignado MacGyver que, con un chicle y un alambre, debe crear un hidroavión. Ese discurso victimista se concreta en sus reivindicaciones continuas de más personal, más medios y más atribuciones. Pero también en cuanto a algo más sutil, que se expresa en los medios

de comunicación de manera insistente: las formas de delincuencia son cada vez más complejas y la sociedad (las leyes, quieren decir) no evoluciona al mismo ritmo, por lo que las amenazas son reales. Dicho de otra manera: habría que dar más margen a quien conoce la delincuencia para poder actuar con eficacia. Dejad a la policía, que ella sabe lo que hay. Legislad según os diga.

Por otro lado, la propia policía, a pesar de ser una institución fundamentalmente conservadora, dados sus objetivos, se presenta como innovadora, flexible y adaptable a cualquier circunstancia. Son como Batman, siempre al tanto de las últimas tecnologías. Y por eso, porque ellos van igual de rápido que los delincuentes, son el dique real contra el enemigo.

En este mundo dividido en buenos y malos, estos últimos solo frenados gracias a la tenacidad policial, hay que reconocer que sí hay algún matiz. Hay delincuentes y aliados de los delincuentes, sectores sociales que los favorecen, que parecen compartir sus intereses (sean cuales sean esos intereses). A veces, estos aliados son algunos jueces, que dejan salir a la calle a los detenidos alegremente. Da igual que este sea un país donde las penas preventivas se aplican alegremente; da lo mismo que se trate de delitos menores o mayores. El esfuerzo de los guardias se echa por tierra cada vez que un juzgado decide que no puede encarcelar durante cuatro años a un carterista que ha robado doscientos euros. Un sindiós. Un caos que se ha transmitido a las conversaciones de bar, en las que siempre hay alguien dispuesto a repetir la coletilla de turno: «Bah, entran por una puerta y salen por otra. Así no se acaba con los delincuentes». O «Claro, como esos son menores, no les pasa nada; ya pueden matar a cualquiera que se

van de rositas». Y eso que España tiene una de las tasas de presos más altas de la Unión Europea.

Otros policías, más agudos en sus análisis, consideran que no se trata de los jueces, que hay que ser radicales e ir a la causa primera: las leyes. ¿Y quién hace las leyes? Los políticos. La imagen de los políticos en la mentalidad policial no es muy diferente a la que tiene buena parte del mundo. Una imagen más bien negativa, que los considera incapaces de resolver los problemas reales de la gente y que los ve enfrascados en un mundo de corrupción y luchas partidistas más que en un compromiso con la sociedad.

Para los policías, los políticos los tratan como trofeos. Los usan como reclamo cuando vienen las elecciones, ya que ellos, los policías, son el *Bien*, pero los dejan tirados en cuanto alcanzan el poder. Les prometen cosas que nunca llegan. Incluso, si ven que la opinión pública critica alguna actuación policial, son capaces de dejarlos vendidos. En resumen, como dice un tal Aitor, miembro de la UIP, a un periódico: «Los políticos dejan que sean los antidisturbios los que solucionen sus problemas para luego echarnos la culpa». Unos veletas sin sentido de la justicia. Vaya usted a saber qué problemas políticos o sociales han resuelto a base de palos, pero ese es otro tema. Los políticos son todos fundamentalmente malos, pero los hay malos y peores. Todo lo que huele a una cultura de la seguridad diferente es sospechoso. Todo el que no hable de mano dura, aumento de penas, control violento de las fronteras, acceso policial a material antidisturbios a lo loco, censura en los medios de la crítica a los policías o algún tipo de comprensión de los orígenes de la delincuencia es de los peores. El avezado lector sabrá concluir a qué polo ideológico del espectro de partidos acerca esto y de qué posiciones lo aleja.

No queremos decir que entre la policía haya unanimidad en torno a ideas más bien autoritarias de derechas. Esa unanimidad no existe en ningún sector. Sin embargo, hay pistas que pueden acercarnos a comprender una subcultura (y la policial lo es). La policía hizo la transición como otros estamentos del Estado. Es decir, cambió del régimen franquista al parlamentario sin inmutarse, sin ningún cambio en los mandos, que no eran precisamente un nido de opositores clandestinos. Manuel Ballesteros, director del Mando Unificado de la Lucha Contrael terrorista con UCD y PSOE, había sido jefe de la Brigada Político Social en Valencia, cargo en el que se le ha acusado de connivencia con casos de tortura; lo mismo ocurre sobre su paso al frente de la policía de San Sebastián, ya entre el franquismo y la transición; en 1981 había dimitido de la Comisaría General de Información cuando se condenó a otros policías por torturas; hasta 1994 ocupó cargos, aunque en 1985 la Audiencia de Bilbao lo había condenado por ayudar a huir a miembros del GAL (el Tribunal Supremo lo absolvió). Según un periódico, un militante antifranquista, en 1971, dijo al notable policía que pronto iban a cambiar las cosas. La respuesta del policía sería clarividente: «Qué ingenuo eres, nosotros somos profesionales. Si hay que perseguir comunistas ahora, lo hacemos, y si en el futuro hay que perseguir a otros, lo haremos igualmente y seguiremos en el mismo puesto».

Los mandos de la Policía siguieron un patrón similar. De los directores generales de la Policía, José Sainz González también procedía de la Brigada Político Social y sus hombres de confianza fueron Billy el Niño y Roberto Conesa, dos joyas de la convivencia y el diálogo. José Manuel Blanco Benítez dimitiría por la misma razón que Ballesteros, la condena de cinco policías por torturas con resultado

de muerte. José Luis Fernández Dopico, el siguiente, fue apartado por hacer desaparecer papeles comprometidos de seguimientos a opositores de la dictadura. Rafael del Río Sendino estuvo trece años en la policía franquista antes de obtener el cargo (por cierto, años después fue nombrado presidente de Cáritas, porque los caminos del Señor son inescrutables, pero transitan siempre cerca del poder). Esto, entre 1979 y 1982.

De la Guardia Civil igual es mejor señalar que en su web actual puede leerse que el golpe de Estado de 1981 contó con la colaboración de «algunos oficiales de la Guardia Civil muy sensibilizados por la constante agresión terrorista». Para qué van a poner *oficiales descaradamente fascistas*, que igual se ofende alguna familia.

El caso es que los policías que entran en servicio en los años 80 se encuentran con unos mandos declaradamente franquistas y unas prácticas similares. Si es cierto que las estructuras se van cambiando y las cabezas más visibles de la policía se buscan durante los mandatos del PSOE entre los escasos efectivos jóvenes, la comisaría de cada barrio o pueblo cuenta con un nutrido grupo de agentes *de los de antes*. No hay ruptura generacional ni grandes debates en los cuarteles de la Guardia Civil ni de la Policía. Su transición es otra, y aunque ya no pueden glosar libremente las hazañas del Caudillo, de vez en cuando asoman la pata, en una especie de continuidad subcultural que llega hasta hoy.

En 2017 salen a la luz los edificantes mensajes de un grupo telefónico de policías que charlaban alegremente sobre todo el que les parecía de izquierdas con poemas dedicados como «Hija de la grandísima puta roja de mierda» (sic). Un tiempo después, se publica la existencia de un pequeño grupo de 13.000 agentes que vierte en las

redes su querencia por la ultraderecha. Si a alguien le apetece echar un rato la mar de bonito, puede consultar cualquiera de los grupos de apoyo a la policía que hay en Facebook, Twitter o cualquier otra red social. Hasta el menos experto en política internacional notaría cierto tufillo neofascista en las publicaciones. Hay varios miembros de la policía que hacen de *youtubers*, pero ninguno es de algo similar a la izquierda, sino que resultan rotundamente ultraderechistas. En definitiva, el entorno social de la policía se mueve en un arco político que va desde lo conservador hasta lo muy cercano a la ultraderecha.

En esa línea, las ideas que vuelcan a la sociedad sobre la justicia, ya comentadas anteriormente, se extienden a otros campos. Es la ética del *que se jodan*, que diría una política conservadora, que presupone la existencia de una línea rígida que divide a los buenos de los malos en función de sus resultados. Los parados, *que se jodan*, que no se han esforzado lo suficiente. Los pobres, las mujeres, los migrantes, los enfermos... Todos son responsables de lo que les suceda. Todos son sospechosos de haber infringido alguna norma. Y todos, indudablemente, merecen una respuesta contundente, más orientada a la venganza que a la justicia. Si la injusticia económica hace que los africanos recorran miles de kilómetros para llegar a Europa, pongamos policía armada en las fronteras y alambradas con cuchillas. Hay que parar esa invasión, que es voluntaria y tiene como objetivo desnaturalizar a occidente. Si los pobres se buscan la vida en los márgenes del sistema, detención y cárcel, que estropean las ciudades. Si las mujeres no alcanzan el mismo techo salarial que los hombres, es porque no lo valen, porque vivimos en un mundo libre. Un concepto de justicia a lo Chuck Norris, que solo deja de

aplicarse cuando entre las víctimas se encuentra alguien cercano, momento en el que se puede cambiar de principios, añadiendo al modelo justiciero unos gramos de corrupción ibérica.

La visión policial de la sociedad ha contribuido a la derechización general del mundo. La permanente exposición de su marco discursivo ha ido calando incluso entre quienes no tienen nada que ganar con la ideología neofascista, que es una mezcla de autoritarismo social y liberalismo extremo económico. Es curioso que, quienes se pasan el día defendiendo que el Estado debe reducirse, no hablen nunca de reducir la policía. Los chistes de funcionarios no van por ellos, no se molesten.

Es conocida en el ámbito de la psicología la *teoría de los estadios* de Kohlberg, un psicólogo que estudió las etapas del crecimiento moral. Pasada una primera etapa en la que las normas se cumplen por miedo al castigo o por puro egoísmo, los seres humanos entran en otra, que Kohlberg llamó *convencional*, que culmina con el cumplimiento de las normas porque estas emanan de las instituciones legales. En la sociedad ideal policial, hay unas normas que deben acatarse precisamente por serlo. Lo policial no se plantea grandes debates morales, ni profundiza en los motivos que llevan a esa norma ni extrae principios éticos para examinar la legitimidad de tales normas. La norma se cumple y punto. Hacer un esfuerzo por legitimarla, comprenderla o criticarla ya corresponde al siguiente nivel evolutivo, al que no parece llegar el pensamiento policial. Igual que los cristianos medievales defendían la fe precisamente por creer en lo absurdo, aquí se defiende acatar la norma, independientemente de su justificación. Herencia de lo militar, suponemos. Rutina de su tarea. No imaginamos una asamblea de antidisturbios decidiendo si

golpean a unos estudiantes enrabiados contra las tasas universitarias. Se golpea y punto.

Como es obvio, el respeto a la norma tiene sus excepciones. Conviene mucho a quienes detentan el poder que quienes no lo tienen obedezcan, pero para los que viven con ventaja las normas son flexibles. Hay que pagar impuestos, pero tampoco hay que ponerse así si uno debe varias decenas de millones al fisco. Ya irá pagando a plazos. Hay que respetar las leyes, pero cada día los juzgados tienen miles de casos de despidos improcedentes o nulos, lo que significa que muchos otros salen adelante sin el cumplimiento de ninguna ley. Tampoco va con ellos lo de las horas de la jornada laboral. Hay clases sociales sobrerepresentadas en la cárcel. Por algo será.

En resumen, habría dos principios sociales básicos:

– La ley debe cumplirse porque es la ley.

– El primer principio es más flexible cuanto más cerca estés de quienes hacen la ley.

Lo extraño es que personas que tienen más papeletas de acabar siendo víctimas del sistema asuman esto. Que no se entienda con facilidad que la norma es una convención, generada en un contexto y por unos actores que defenderán sus intereses. El primero de ellos será siempre conservar el poder. Si para ello se legisla a favor de uno u otro colectivo, es como consecuencia de esta intención. Siempre que esa norma no acabe perjudicando a los aliados fundamentales en el mantenimiento del poder. Este sencillo examen es inconcebible para la mentalidad policial. Pero no debería serlo para el resto de personas.

Como, de cualquier manera, se van a producir incumplimientos de la ley, ya que el ser humano es impredecible y fundamentalmente

malvado, debe controlarse a la población al máximo. Esta es otra de las ideas que se ha ido extendiendo como una mancha de petróleo. Si hace un siglo los movimientos socialistas venían a defender que la libertad solo es tal cuando existe un alto grado de igualdad, ahora la mentalidad policial ha conseguido que se entienda que la libertad solo es tal con un alto grado de vigilancia, de lo que llaman *seguridad*. Cámaras, detectores, registro de documentos, de cada paso, de ADN, de la retina; presencia policial en la calle, en las redes sociales, en Internet, vigilantes de seguridad en el transporte, en cada edificio, en cada urbanización, en las bibliotecas, en los museos, en los restaurantes. Una tupida red de agentes vigilando una sociedad siempre sospechosa, con el mensaje de «si no ha hecho usted nada, no tiene nada que temer». O lo que es lo mismo: quien se queja del control es que tiene algo que ocultar. Volvemos al principio del libro, cuando hablábamos de distopías. La sociedad ideal de la mentalidad policial se asemeja mucho a ellas. Una sociedad donde la vigilancia es total, dividida en buenos (los policías y el poder) y potenciales malos (todos los demás), con valores extremadamente autoritarios y escasamente profundos.

No podremos evitar que la policía genere esta cultura, por los condicionantes ya señalados, pero sí podemos tratar de que se reduzca su aceptación a su círculo, no al resto del mundo.

Capítulo 10
UN MUNDO SIN POLICÍA

Ya hace más de dos décadas desde que Fredric Jameson escribiera aquello de que es «más fácil imaginar el deterioro total de la Tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo». Si nos fiásemos de lo que proyecta la cultura, tendríamos que darle la razón. Vivimos una oleada de ficciones distópicas. Como dice Layla Martínez, «la forma en que imaginamos el futuro está fuertemente condicionada por los productos culturales que consumimos». Sin poder asegurar que esos productos son causa o consecuencia de un imaginario colectivo (o una mezcla de ambas), lo que sí parece cierto es la inexistencia de discursos o propuestas de un futuro mejor.

Se señala a menudo como origen de este modo de pensar al liberalismo *thatcheriano*, que impulsó aquello de «no hay alternativa». O al derrumbe de las dictaduras de economía planificada, que habrían supuesto el final de un sueño utópico convertido en terror. Sin duda, son elementos importantes del discurso, pero este queda incompleto si no analizamos la contribución del modo de pensar policial que hemos venido analizando. En esa división social entre bue-

nos y malos, dentro o fuera de la ley, cualquier concesión a la maldad, a su comprensión o a su trato desde una óptica no punitiva es una cesión inaceptable. Una equivocación estratégica. Una idea, en el mejor de los casos, ingenua. Cualquier pensamiento que no incluya la permanente vigilancia y control bajo sospecha de todos y cada uno de los habitantes del planeta es, también, una postura blanda, boba, irreal. La mínima confianza en la bondad, en la solidaridad o en la capacidad de vivir en paz sin la amenaza del castigo es ilusa. Esto es lo que se ha venido denominando *buenismo*. La palabra se incluye en el diccionario de la RAE: «Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia». Una interpretación claramente ideológica del idioma, que ha logrado crear un sustantivo derivado atribuyéndole significado contrario a la raíz. De la palabra *bien*, de connotación obviamente positiva, se deriva *buenismo*, de connotación casi burlesca.

Es raro que el término no se haya denunciado como arma ideológica del mundo capitalista. Corren ríos de tinta cuando desde el feminismo se propone revisar el lenguaje machista, pero cuando la derecha crea términos para mediatizar el discurso, el silencio es total.

Más raro aún es que parte de los movimientos radicales lo haya hecho suyo. Solo hay que analizar mínimamente la palabra, el significado que conlleva y el discurso que apareja, para descubrir que es una carga de profundidad contra la posibilidad de soñar siquiera con una alternativa al sistema actual. Si crees que diferentes culturas pueden convivir en un espacio común, eres buenista. Si crees que es posible la colaboración y el apoyo mutuo entre vecinos, eres buenista. Si consideras que puede existir una ética al margen del beneficio económico, eres buenista. Si crees que podríamos funcionar

sin una autoridad fuerte, eres muy buenista. Si consideras que sin policía el mundo no sería un caos de robo, asesinato y violación continua, eres el mayor buenista. Por lo tanto, si crees que puede existir un mundo mejor, basado en la libertad y la igualdad, serás buenista. La intención de la palabra, claro, es anular el debate. En frente de los buenistas no se sitúan los *malistas*, sino los *realistas*. Los que saben lo que hay. Los que ven el mundo como es. Pragmáticos y resolutivos. Los que vigilan el mal para mantenerlo a raya, aunque a veces tengan que usar métodos un tanto explícitos. Los policías.

Corren, por lo tanto, malos tiempos para imaginar otros mundos que no sean aún peores. Se establece, al contrario, una carrera para mostrar continuamente el lado más perverso del ser humano, que pasa de lo anecdótico a la categoría, como si fuera *lo real*. Cada película es *más oscura que la anterior*; cada programa infantil es más cínico y violento; cada novela negra describe con mayor detalle una crueldad que raya lo ridículo; los comentarios en las redes sociales representan ese distanciamiento irónico de quien cree que no hay nadie al otro lado, nadie que merezca la pena; se oye cada vez más el martilleo simplón de que *nacemos solos* (qué curioso nacer solo, así, sin madre). Se pide a gritos la intervención policial en un mundo de lobos acechantes. Solo el miedo puede vencer al malo.

La imposibilidad de pensar en un futuro mejor actúa al tiempo como condición de partida y como dique de contención. Si no hay ninguna propuesta, es imposible desbordar el sistema. Nadie derruye sin un mínimo plan de construcción. Cuando Durruti decía lo de «no nos dan miedo las ruinas», no era porque pensara quedarse a vivir en ellas, sino porque sabía que en poco tiempo, de esas ruinas podría surgir algo mejor que el anterior edificio. Hoy pretendemos demo-

ler, pero nos negamos a tener siquiera un plano de reconstrucción, alguna noción.

Habrá lectores que, durante la lectura de este texto, hayan pensado que la crítica es más o menos acertada, que los cuerpos policiales tienen como misión el mantenimiento del orden y que, cuando ese orden es injusto, su labor lo es. Incluso que todo cuerpo policial acaba tomando una relevancia que lo convierte en amenaza para la constitución de sociedades realmente libres. Pero aceptarán el papel policial como mal menor. Considerarán posible un modelo de agentes armados al servicio del pueblo. Creerán que la mejora social es compatible con la vigilancia armada. Incluso obligatoriamente compatible. Serán pragmáticos, realistas, resolutivos. Tendrán, al fin y a la postre, mentalidad policial. Recogerán aquella máxima de la Revolución Francesa: «La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública».

Superar ese paradigma no es sencillo, pero puede intentarse. Para empezar, con una dosis de realismo, la misma medicina que dicen aplicar los que defienden la imposibilidad de soñar. Nunca, en ninguna mejora social, en ningún intento de transformación, en ninguna revuelta por la justicia o en ninguna revolución, la policía se ha sumado al pueblo. Jamás.

Y no se trata de que la rebelión sea más o menos tranquila. La policía acomete con violencia a los mineros cuando protestan por el fin de su sector armados con petardos y piedras y a la sentada pasiva de las protestas de los *indignados* en la Plaza de Catalunya. Allá donde ha habido algún conato de rebelión, la policía ha estado enfrente. Ninguno de los mensajes de algunos bienintencionados manifestantes ha tenido efecto. A la orden de sus superiores, desen-

fundan y atacan. Sin dudar. Pretender que existan unas fuerzas del orden que naveguen a favor del pueblo sí es una ingenuidad.

Además, uno de los errores frecuentes de las experiencias utópicas ha sido el de considerar que quienes las forman deben ser seres humanos superiores, moralmente al menos. El reto, creemos, está en pensar en mundos mejores al alcance de cualquiera. Por eso, si una propuesta social incluye a un cuerpo armado dedicado a defender los valores de esa revolución, acabará creando una nueva Stasi, por muy capacitados que estén los policías. La propuesta de Platón respecto a unos guardianes educados en la comprensión de la moral es un absurdo. Los guardias, guardias son. Sirven para guardar. Y solo guarda el que tiene.

Por lo tanto, vayamos más allá de lo que el capitalismo parlamentario propone. Tengamos presente aquello que decía Alain Badiou: «Los partidarios del orden establecido no pueden en realidad describirlo como perfecto o maravilloso. Por eso prefieren venir a decirnos que todo lo demás fue, es o sería horrible». No caigamos en la trampa de la anulación de la utopía.

Imaginar un mundo sin policía es imaginar un mundo distinto. En cuanto la propiedad privada hace su aparición en escena y se comienza a producir acumulación de riqueza por parte de un grupo social, surgirán leyes que aparentemente protejan a toda la sociedad, pero que tendrán como objetivo fundamental defender a los grandes propietarios. Y se crearán cuerpos armados para perseguir a quienes no acaten esas leyes.

Al mismo tiempo, las diferencias de riqueza generan la ruptura social. Una parte del mundo no solo vive a expensas de otro, sino que lo hace en una dimensión distinta. Sus preocupaciones diarias

nada tienen que ver con las del común de los mortales. Se fractura incluso el espacio. Cada cual transita sus propias calles, ríos, mares o incluso su espacio, en el que no ve al otro.

En ese campo de juego, se abre la puerta al miedo al otro. Y quienes poseen la mayor parte de la riqueza explotan ese miedo propio como si fuera extensible al resto de la sociedad. El miedo a que sus palacios sean asaltados llega a la clase media en forma del *fantasma okupa*. Se clama por una mayor presencia policial, claro.

Vincular la eliminación de la policía a la de la propiedad privada tiene su raíz en una enorme parte de los delitos que persiguen las fuerzas de seguridad. Las comunidades con propiedad colectiva no necesitan policía.

Pero también es necesario un cambio de mentalidad en la resolución de los conflictos. Todas las sociedades humanas han tenido y tienen diferentes conflictos. No todas (es más, solo unas pocas) han recurrido a un cuerpo permanentemente armado que vigile a su población preventivamente o que la persiga. Fundamentalmente, porque los conflictos de una comunidad son asumidos como propios, como parte de la dinámica social, no como algo que solo afecta a los protagonistas. Esto no significa siempre que la comunidad se convierta en juez y parte de cada hecho, sino que entiende que en esa resolución le va también el interés de que no se llegue a una espiral que provoque la destrucción de lo común. Por lo tanto, se establecen mecanismos basados en la restauración del daño. No se considera la posibilidad de que un hecho dañino convierta a esa persona en dañina por sí. Incluso se admite la posibilidad de que, en cualquier momento, alguien deba restaurar un daño hecho, porque la categoría *delincuente* no es aplicable.

Este modelo de justicia no siempre termina, claro, con un abrazo en torno a la hoguera de medianoche. Algunos de los procedimientos de restauración del daño se asemejan más a aquello de *ojo por ojo*. Otros no. Otros restauran el daño de manera simbólica, por medio de recompensas materiales o incluso con medidas que, no suponiendo la pérdida de la libertad, sí son duras, como el destierro. En cualquier caso, contienen al menos dos elementos interesantes: por un lado, la implicación del grupo en cuanto al interés en que se resuelvan los problemas; por otro, lo innecesario de la policía.

Se dirá que en sociedades más bien atomizadas y menos *complejas* esto tiene sentido, pero que en ciudades de 6 millones de habitantes, en un mundo donde los viajes son frecuentes y posibles, poco recorrido tiene una justicia local. Se responderá que la mayor parte de los delitos y de la labor policial va encaminada precisamente a temas locales, a asuntos que no afectan a esos 6 millones de personas, sino a un número mucho más reducido, que podría solventar sus conflictos de otra forma. La imagen de los policías como una gran corporación que trabaja a nivel internacional continuamente es solo parcialmente cierta.

También se dirá que las ciudades de 6 millones de habitantes, en efecto, son lugares poco sensatos para la práctica de la utopía. No solo para la erradicación de la policía, sino para cualquier práctica que tenga que ver con la justicia distributiva, con el impacto ecológico o con la ausencia de poder centralizador. Dentro de la propuesta utópica figura su imposibilidad. Dentro del realismo capitalista figura su obligatoriedad, ahogando cualquier otra alternativa existencial.

Un mundo sin propiedad privada y con cohesión grupal no evitará todos los daños, pero los gestionará de forma diferente.

Pero entendemos que esto puede ser un aplazamiento indefinido de lo que se puede hacer hoy día.

Para empezar, es necesario plantearse la disminución de las plantillas policiales y de sus campos de intervención. Para dar charlas en institutos sobre acoso, educación vial o sexualidad no hacen falta policías, sino educadores. Para resolver un problema de ruido entre vecinos no hace falta la policía sino, en todo caso, la mediación de otros vecinos. Para rescatar montañeros no es necesario un cuerpo armado, sino otros montañeros con medios. Para ayudar a evacuar una zona en caso de incendio teníamos a Protección Civil, antes de su casi anulación a manos de la policía. Reducir la constante atribución de tareas que señalamos en capítulos anteriores es una posibilidad. Puede demostrarse en la práctica, resolviendo diferentes asuntos sin la necesidad de lo policial y reclamarse en el espacio público.

Para ello, hay que denunciar el uso masivo de medios para la policía. A pesar de que, como hemos visto, los agentes se pasan la vida diciendo que carecen de medios, el presupuesto destinado a la policía no ha hecho más que crecer. La Policía Nacional se come más de 3.650 millones de euros. La Guardia Civil, más de 3.500 millones de euros. Juntos, suponen un presupuesto 30 % mayor a nivel nacional que el de educación.

La Policía pide medios y, además, medios lesivos. Poner el acento en lo grave que es armar sistemáticamente a la policía es dejar clara cuál es su función. ¿Para proteger a un pueblo cuyo índice de violencia es bajísimo necesitan armas para electrocutar? ¿Les parece que se quedan indefensos si no pueden disparar pelotas de goma? ¿Es urgente comprar decenas de vehículos blindados? Estas son reivindicaciones policiales. Si se van concediendo, algún día dispondrán

de armas como cañones de sonido, sistemas informáticos de control masivo o posibilidad de registrar el ADN de toda la población. Al servicio del pueblo. Por supuesto.

Todo el mundo quiere vivir con ciertas dosis de seguridad. Incluso con dosis altas. Negar eso es dejar la tranquilidad en manos del Estado. La cuestión reside en que atravesar la ciudad con calma y sin miedo a ser atacado o violada puede enfocarse desde una óptica preventiva no policial. Los lugares en los que la gente tiene vínculos, en los que se conoce, son lugares más seguros. Si un niño puede atravesar su barrio conociendo a la panadera, a la quiosquera, al portero, a las vecinas del bloque de al lado, a los adolescentes que se sientan en el parque, a la persona que atiende la biblioteca o a las ancianas que charlan al sol, está mucho más seguro que si la arquitectura social y urbanística hace de ese barrio un lugar de paso hasta llegar a la verja de su urbanización, por muchos coches policiales que lo circundén. Reivindicar las calles como factor de cohesión y de seguridad común.

De momento, iniciativas como MPD150 parecen lejanas. Se trata de un movimiento para el desmantelamiento de la policía de Minneápolis, surgido tras las protestas por la violencia policial de carácter racista que propone la sustitución de los presupuestos policiales por dotaciones comunitarias. Algo similar es Filthbusters, un grupo inglés que trabaja en las alternativas a la denuncia policial en conflictos y en la documentación de la violencia policial. Este tipo de iniciativas busca lograr espacios sin policía, al tiempo que realizan intervenciones en el medio social para cohesionar a la comunidad y establecer otros mecanismos de resolución de conflictos. Es posible que lleguen a nuestros pueblos y barrios algún día.

No perdemos de vista que un mundo mejor es un mundo donde la policía no es necesaria, pero tampoco que, para que ese mundo llegue, la mentalidad policial, que hemos venido explicando en el libro, es un obstáculo. Por lo tanto, disminuir o contrarrestar la presencia de ese discurso, disminuir la propia presencia policial, denunciar la sistemática concesión de recursos a las fuerzas del orden o comenzar a tejer redes que den alternativas a llamar a la guardia cada vez que hay un conflicto pueden ser puntos de partida.

La función de este texto, de cualquier forma, no es tanto avanzar un programa de actuación como mostrar su necesidad y alguna posibilidad. Abrir la puerta a la reflexión y acción sobre lo policial más allá de la puntual indignación que producen hechos de violencia. Profundizar en el sentido y las consecuencias de lo policial como institución, en su concreción diaria y en el imaginario colectivo. Abrir una grieta de libertad en el férreo control. O señalar que esa grieta puede comenzar a abrirse. El esfuerzo está hecho. Nos vemos en las calles.



La 2.^a edición de *La Policía. Un análisis crítico* se terminó de imprimir en octubre de 2022 en Vallekas, en los talleres de Imprenta De Diego. Impreso sobre papel offset de 90 gramos con tipos Goudy Bookletter de 11,5 puntos.

Si tuviéramos que elegir un adjetivo para definir este siglo en el que nos ha tocado vivir, sería el de *eterno*. Y es que poca gente parece creer, con un mínimo de sinceridad, en las grandes instituciones históricas como la Iglesia, los partidos políticos, la justicia, etc. El descrédito no está restringido a esos referentes, sino que ha socavado el prestigio de muchos campos profesionales que, en otro tiempo, parece que gozaron de cierto respeto, como el periodismo, la abogacía, la docencia, etc.

Por eso, todos podrían mirar con recelo a la policía, que ha conseguido una imagen que para sí quisieran otros organismos. Pero, ¿qué ha ocurrido para que una organización que ha ejercido tanta violencia contra las capas más débiles de la sociedad a lo largo de su historia haya mejorado considerablemente su reputación?

Las páginas del libro que tienes entre tus manos analizan con rigor y amabilidad las herramientas culturales que han operado en las últimas décadas para producir ese cambio. Al mismo tiempo, encontrarás una descripción crítica de los rasgos propios de la realidad policial, su visión de la justicia, la percepción que tienen de sí mismos, etc. No se trata solo de entender cuál es la función social de la policía, sino de entender algunos de los mecanismos que operan en esto que llamamos *democracia* y que impiden avanzar hacia un mundo donde la conjunción de igualdad y libertad abra nuevos horizontes de justicia social.

